

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/RARM/JD06/SLP/55/2021

INE/CG210/2023

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO

EXPEDIENTE: UT/SCG/Q/RARM/JD06/SLP/55/2021

DENUNCIANTE: RAÚL ALICIO RAMÍREZ MÉNDEZ Y
OTRAS PERSONAS

DENUNCIADO: PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE
MÉXICO

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO UT/SCG/Q/RARM/JD06/SLP/55/2021, INICIADO CON MOTIVO DE LAS DENUNCIAS PRESENTADAS POR RAÚL ALICIO RAMÍREZ MÉNDEZ Y OTRAS PERSONAS, A TRAVÉS DE LAS CUALES HICIERON DEL CONOCIMIENTO DE ESTA AUTORIDAD, HECHOS POSIBLEMENTE CONTRAVENTORES DE LA NORMATIVA ELECTORAL, CONSISTENTES EN SU PRESUNTA INDEBIDA AFILIACIÓN AL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, QUIEN SUPUESTAMENTE USÓ PARA TAL EFECTO, SIN CONSENTIMIENTO ALGUNO, SUS DATOS PERSONALES

Ciudad de México, 30 de marzo de dos mil veintitrés.

G L O S A R I O

<i>Comisión</i>	La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral
<i>Consejo General</i>	Consejo General del Instituto Nacional Electoral
<i>Constitución</i>	Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
<i>DEPPP</i>	Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral
<i>DERFE</i>	Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral
<i>Instituto o INE</i>	Instituto Nacional Electoral

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/RARM/JD06/SLP/55/2021

Ley de Medios	Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral
Ley de Partidos	Ley General de Partidos Políticos
LGIPE	Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
PVEM o denunciado	Partido Verde Ecologista de México
Personas quejosos o denunciantes	Raúl Alicia Ramírez Méndez, Francisco Eduardo García Donato, Manuel Alejandro Acosta Márquez, María Luz Adriana Esparza Esparza, Armando Pompa Cruz, Jahaziel Antonio García Torralba, Inés Pineda Silverio, Karen Alejandra Martínez Carmona, Rosa Irene Carmona Jasso, Ruby del Carmen Holguín García, Marcos Rubén Portillo Muñoz, Francisco Javier Navarro Cañedo , Noé Isael Sahagún Porras, Elvira Ávila Camargo, Jacqueline Gómez Flores, Evelia Reyes Jiménez, Carolina Lara Morales, María Socorro Baeza Rodríguez, Alex Leonel Alfaro López, Huciel Santiz López, Consuelo Guadalupe Martínez Ballinas, Fermina Ruiz Pérez y Juana Gómez Vázquez
Reglamento de Quejas	Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral
Sala Superior	Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
Unidad Técnica o UTCE	Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del <i>INE</i>

R E S U L T A N D O

I. **ACUERDO INE/CG33/2019**¹. El veintitrés de enero de dos mil diecinueve, este *Consejo General*, aprobó el acuerdo **INE/CG33/2019**, por el cual se determinó la implementación, de manera excepcional, de un procedimiento para la revisión, actualización y sistematización de los padrones de afiliadas y afiliados de los partidos políticos nacionales, en el que se acordó la suspensión de la resolución de

¹ Consultable en <https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/101664/CG1ex201901-23-ap-14.pdf>

**CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/RARM/JD06/SLP/55/2021**

diversos procedimientos sancionadores ordinarios, relacionados con presuntas indebidas afiliaciones de ciudadanos de todos los partidos políticos.

En este sentido, en el punto de acuerdo TERCERO del citado acuerdo, se determinó lo siguiente:

TERCERO. Los PPN darán de baja definitiva de manera inmediata de su padrón de militantes los nombres de aquellas personas que, antes de la aprobación de este Acuerdo, hayan presentado quejas por indebida afiliación o por renunciaciones que no hubieran tramitado. En el caso de las quejas por los supuestos antes referidos que se lleguen a presentar con posterioridad a la aprobación de este Acuerdo, los PPN tendrán un plazo de 10 días contado a partir del día siguiente de aquel en el que la UTCE les haga de su conocimiento que se interpuso ésta, para dar de baja de forma definitiva a la persona que presente la queja.

[Énfasis añadido]

Asimismo, se precisó que los procedimientos sancionadores ordinarios cuya suspensión pudiera generar la caducidad de la potestad sancionadora por parte de esta autoridad, en términos de la jurisprudencia 9/2018, emitida por la Sala Superior, o sobre los cuales recayera una orden expresa de resolución por parte del mencionado órgano jurisdiccional, continuarían con la instrucción ordinaria.

II. INFORME SOBRE EL ACUERDO INE/CG33/2019. El veintiuno de febrero de dos mil veinte, la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE, presentó al Consejo General el Informe Final sobre el procedimiento de revisión, actualización y sistematización de los padrones de afiliadas y afiliados de los Partidos Políticos Nacionales (**INE/CG33/2019²**), mediante el cual, hizo del conocimiento que los siete partidos políticos, entre ellos el *PVEM*, durante la vigencia del citado Acuerdo, presentaron los informes respectivos sobre el avance en el agotamiento de las etapas previstas en el acuerdo **INE/CG33/2019**.

III. DENUNCIAS. Mediante sendos oficios³, diversas Juntas Distritales Ejecutivas de este Instituto hicieron del conocimiento a la UTCE las quejas

² Consultable en la página de internet del INE, o bien en la dirección electrónica: <https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/handle/123456789/113621>

³ Visible a fojas 1 al 141 del expediente

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/RARM/JD06/SLP/55/2021

presentadas por las personas quejas en contra del PVEM, ya que presuntamente fueron indebidamente afiliadas a dicho partido político, haciendo para tal efecto el uso no autorizado de sus datos personales.

IV. REGISTRO, ADMISIÓN, RESERVA DE EMPLAZAMIENTO, DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN Y BAJA DE LAS PERSONAS QUEJOSAS DEL PADRON DE MILITANTES DEL PVEM. Mediante acuerdo de cinco de febrero de dos mil veintiuno⁴ la UTCE registró las quejas de mérito; las admitió a trámite y reservó su emplazamiento hasta contar con mayores elementos para determinar la existencia de las infracciones denunciadas y la probabilidad de que el denunciado las haya cometido. Asimismo, se requirió al *PVEM* y a la *DEPPP*, a efecto de que señalaran si las personas quejas fueron afiliadas al denunciado, la fecha de afiliación respectiva y, en el caso del citado partido político, las cédulas de afiliación correspondientes. Del mismo modo, se ordenó la baja de las y los inconformes del padrón de militantes respectivo.

V. CUMPLIMIENTO AL REQUERIMIENTO FORMULADO A LA DEPPP. Mediante correo electrónico institucional de once de febrero de dos mil veintiuno⁵ el Titular de la *DEPPP*, informó que las personas quejas si fueron afiliadas al partido político denunciado, en diversas fechas; sin embargo, desde el treinta de noviembre de dos mil veinte y del ocho de **febrero** de dos mil veintiuno, fueron dadas de baja del padrón de militantes del denunciado.

VI. CUMPLIMIENTO AL REQUERIMIENTO FORMULADO AL PVEM. Mediante oficio PVEM-INE-170/2021, de once de febrero de dos mil veintiuno⁶ el denunciado dio cumplimiento al requerimiento de información formulado por la *UTCE*, señalando que, con excepción de Manuel Alejandro Acosta Márquez, sí afilió a las personas quejas en las fechas precisadas por la *DEPPP*, sin embargo, desde el ocho de febrero de dos mil veintiuno, se encuentran dadas de baja de su padrón de militantes.

⁴ Visible a fojas 142 a 152 del expediente

⁵ Visible a fojas 165 a 167 del expediente.

⁶ Visible a fojas 168 a 170 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/RARM/JD06/SLP/55/2021

Del mismo modo, mediante oficios PVEM-INE-184/2021⁷, PVEM-INE-204/2021⁸, PVEM-INE-289/2021⁹, PVEM-INE-565/2021¹⁰, PVEM-INE-575/2021¹¹, PVEM-INE-132/2022¹² y PVEM-INE-170/2022¹³, el PVEM exhibió el original de quince cédulas físicas de afiliación correspondientes a igual número de ciudadanas y ciudadanos inconformes, con el objeto de demostrar su legal incorporación al padrón de militantes respectivo.

VII. PRÓRROGA DE PLAZO AL DENUNCIADO, ESCISIÓN Y VISTA A QUEJOSOS. Mediante proveído de veintinueve de marzo del dos mil veintiuno¹⁴, se concedió la prórroga de plazo solicitada por el PVEM a efecto de que diera cabal cumplimiento al proveído de cinco de febrero del mismo año y aportara las cédula de afiliación requeridas por la UTCE. Del mismo modo, se **escindió** la queja de **Francisco Javier Navarro Cañedo** debido a que en el procedimiento ordinario sancionador identificado con la clave **UT/SCG/Q/JCMR/JD01/YUC/50/21**, se encuentra tramitándose una denuncia en contra del Partido Verde Ecologista de México por la probable indebida afiliación de dicho quejoso, esto es, previo a la instauración del procedimiento en que se actúa, el citado quejoso ya había denunciado los mismos hechos.

Asimismo, en estricta observancia al principio de contradicción, la UTCE dio vista, con copia simple del original de las cédulas de afiliación respectivas, a veintiuna de las personas quejas, a efecto de que realizaran las manifestaciones pertinentes.

Al respecto, dicho acuerdo fue notificado conforme a lo siguiente:

⁷ Visible a fojas 199 a 203 del expediente.

⁸ Visible a fojas 218 a 222 del expediente.

⁹ Visible a fojas 293 a 297 del expediente.

¹⁰ Visible a fojas 336 a 338 del expediente.

¹¹ Visible a fojas 339 a 343 del expediente.

¹² Visible a fojas 353 a 356 del expediente.

¹³ Visible a fojas 405 a 408 del expediente.

¹⁴ Visible a fojas 228 a 235 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/RARM/JD06/SLP/55/2021

No	Nombre de la persona quejosa	Fecha de notificación	Objeciones
1	Raúl Alicio Ramírez Méndez	08/04/2021 ¹⁵ Se entendió con el quejoso	Si formuló objeciones ¹⁶ Solicito se me de, de baja del partido ya que nunca autorice se me afiliara, sólo me pidieron mi credencial para un apoyo económico, sin embargo, nunca autorice ser militante de dicho partido.
2	Francisco Eduardo García Donato	09/04/2021 ¹⁷ Ninguna persona atendió la diligencia Se notificó por estrados	No formuló objeciones
3	María Luz Adriana Esparza Esparza	08/04/2021 ¹⁸ Se entendió con la quejosa	Si formuló objeciones ¹⁹ Solicito se me de (sic) baja cuanto antes del partido Verde Ecologista de México, ya que en ningún momento autorice la información personal para que se me afiliara al partido y no reconozco en todos y cada uno de los espacios del formato de afiliación que el partido proporciona.
4	Karen Alejandra Martínez Carmona	07/04/2021 ²⁰ Se entendió con persona autorizada por la quejosa	No formuló objeciones
5	Rosa Irene Carmona Jasso	07/04/2021 ²¹ Se entendió con la quejosa	Si formuló objeciones ²² Vengo a responder a la cédula de afiliación del Partido Verde

¹⁵ Visible a fojas 300 a 301 del expediente.

¹⁶ Visible a foja 304 del expediente.

¹⁷ Visible a fojas 308 a 319 del expediente.

¹⁸ Visible a fojas 320 a 321 del expediente.

¹⁹ Visible a foja 324 del expediente.

²⁰ Visible a fojas 280 a 281 del expediente.

²¹ Visible a fojas 288 a 289 del expediente.

²² Visible a foja 292 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/RARM/JD06/SLP/55/2021

No	Nombre de la persona quejosa	Fecha de notificación	Objeciones
			Ecologista de México, el cual niego rotundamente que la firma estampada en la misma sea propia. Ya que jamás he dado mi firma para estar afiliada a dicho partido. Manifiesto que en alguna ocasión preste mi credencial para votar que en la cédula de afiliación aparece, misma que extravié tiempo después.

VIII. EMPLAZAMIENTO, VISTA A QUEJOSOS E INSPECCIÓN AL SITIO WEB DEL PVEM. Mediante auto de ocho de diciembre de dos mil veintidós²³, la Unidad Técnica emplazó al *PVEM*, para que manifestara lo que a su derecho conviniera y, en su caso, aportara las pruebas que considerara pertinentes, **corriéndosele** traslado con copia simple de las constancias que, hasta esa etapa procesal, integran el presente expediente.

Dicho proveído se notificó de la siguiente manera:

Fecha de notificación	Contestación	Síntesis de la respuesta del denunciado
Citatorio 13/12/2022 ²⁴	Escrito de 04/12/2022 ²⁶	La queja presentada por Francisco Javier Navarro Cañedo debe desecharse en virtud de que dicho quejoso instauró una denuncia por los mismo hechos en contra del PVEM, la cual se encuentra tramitándose en el Procedimiento Ordinario Sancionador identificado con la clave UT/SCG/Q/JCMR/JD01/YUC/50/21.
Cédula 14/12/2022 ²⁵		No existe indebida afiliación de las personas quejosas en virtud de que fueron incluidas en el padrón de militantes del PVEM de manera libre y voluntaria, lo cual se demuestra con el original de las cédulas de afiliación que obran en el sumario respecto de Raúl Alicia Ramírez Méndez, Francisco Eduardo García Donato, Manuel Alejandro

²³ Visible a foja 357 a 367 del expediente

²⁴ Visible a fojas 378 a 380 del expediente.

²⁵ Visible a fojas 381 a 384 del expediente.

²⁶ Visible a fojas 385 a del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/RARM/JD06/SLP/55/2021

Fecha de notificación	Contestación	Síntesis de la respuesta del denunciado
		<p>Acosta Márquez, María Luz Adriana Esparza Esparza, Jahaziel Antonio García Torralba, Inés Pineda Silverio, Karen Alejandra Martínez Carmona, Rosa Irene Carmona Jasso, Elvira Ávila Camargo, María Socorro Baeza Rodríguez, Alex Leonel Alfaro López, Huciel Santiz López, Consuelo Guadalupe Martínez Ballinas, Fermina Ruiz Pérez y Juana Gómez Vázquez</p> <p>Que la DEPPP realizó una actualización del Sistema de Verificación del Padrón de personas afiliadas a los Partidos Políticos, llevando a cabo una migración de la información de los padrones de afiliados, teniendo como efecto que los registros cancelados antes del 11 de enero de 2021, ya no puedan ser consultados por los partidos políticos en el nuevo Sistema de Verificación del Padrón de personas afiliadas a los Partidos Políticos, lo que imposibilitó al PVEM saber si los quejosos del presente procedimiento cancelados en la fecha referida estuvieron afiliados a dicho instituto y, en su caso, la fecha de cancelación.</p> <p>No existe uso indebido de los datos personales de los quejosos ya que se utilizaron para los fines proporcionados por las y los inconformes.</p> <p>En la actualidad las personas quejasas se encuentran dadas de baja del padrón de militantes del PVEM dando cumplimiento a lo ordenado por la UTCE y el acuerdo INE/CG33/2019, lo cual debe considerarse al resolver el presente asunto.</p> <p>Por último, ofreció como medio de prueba el original de la cédula de afiliación de Manuel Alejandro Acosta Márquez y María Socorro Baeza Rodríguez, la documental pública consistente en copia simple del oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/2198/2021, signado por el entonces Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos de este Instituto, Patricio Ballados Villagómez; así como la instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana.</p>

Del mismo modo, en cumplimiento estricto al principio de contradicción, se dio vista a diversas personas quejasas con copia simple del original de la cédula de afiliación aportada por el PVEM, como se advierte en la tabla siguiente:

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/RARM/JD06/SLP/55/2021

No	Nombre de la persona quejosa	Fecha de notificación	Objeciones
1	Jahaziel Antonio García Torralba	19/01/2023 No se localizó a la quejosa en el domicilio porque ya no vive ahí Se notificó por estrados	No formuló objeciones
2	Elvira Ávila Camargo	18/01/2023 Se entendió con la quejosa	No formuló objeciones
3	Juana Gómez Vázquez	25/01/2023 Se entendió con la quejosa	No formuló objeciones
4	Alex Leonel Alfaro López	24/01/2023 Se entendió con persona autorizada por el quejoso	No formuló objeciones
5	Consuelo Guadalupe Martínez Ballinas	25/01/2023 Se entendió con la quejosa	No formuló objeciones
6	Fermina Ruíz Pérez	25/01/2023 Se entendió con la quejosa	No formuló objeciones
7	Huciel Santiz López	24/01/2023 Se entendió con el quejoso	No formuló objeciones
8	Inés Pineda Silverio	18/01/2023 Se entendió con la quejosa	No formuló objeciones

Por último, se ordenó la inspección al sitio WEB del PVEM con el propósito de verificar que las personas quejasas fueron dadas de baja de la plataforma publica de afiliados del denunciado. Lo cual se constató mediante el acta circunstanciada de ocho de diciembre de dos mil veintidós²⁷

IX. ALEGATOS Y VISTA A LOS QUEJOSOS CON CÉDULAS DE AFILIACIÓN. Mediante proveído de diecisiete de enero de dos mil veintitrés, en estricta observancia al principio de contradicción, la UTCE puso los autos a la **vista**

²⁷ Visible a foja 368 a 377 del expediente

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/RARM/JD06/SLP/55/2021

de las partes para que, en vía de alegatos, manifestaran lo que a su derecho conviniera.

Del mismo modo, la autoridad sustanciadora dio vista con copia simple del original de la cédula de afiliación respectiva, a Manuel Alejandro Acosta Márquez y a María Socorro Baeza Rodríguez, a efecto de que realizaran las manifestaciones pertinentes.

Dicho proveído se notificó de la siguiente manera

Persona notificada	Fecha de notificación	Fecha de contestación y alegatos
PVEM	18/01/2023 ²⁸ Se entendió con persona autorizada por el denunciado.	Escrito de 25/01/2023 ²⁹ Reprodujo lo manifestado en la contestación al emplazamiento.
Raúl Alicio Ramírez Méndez	20/02/2023 Ninguna persona atendió la diligencia Se notificó por estrados	No contestó
Francisco Eduardo García Donato	20/01/2023 El quejoso no atendió el citatorio S notificó por estrados	No contestó
Manuel Alejandro Acosta Márquez	19/01/2023 Se entendió con el quejoso	No contestó ni formuló objeciones a la cédula de afiliación
María Luz Adriana Esparza Esparza	20/01/2023 Se entendió con la quejosa	No contestó
Armando Pompa Cruz	20/01/2023 Por razones de inseguridad y con el consentimiento del quejosos se notificó por estrados	No contestó

²⁸ Visible a foja 793 del expediente

²⁹ Visible a fojas 807 a 821 del expediente

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/RARM/JD06/SLP/55/2021

Persona notificada	Fecha de notificación	Fecha de contestación y alegatos
Jahaziel Antonio García Torralba	19/01/2023 No se localizó a la quejosa en el domicilio porque ya no vive ahí Se notificó por estrados	No contestó
Inés Pineda Silverio	18/01/2023 Se entendió con la quejosa	No contestó
Karen Alejandra Martínez Carmona	18/01/2023 Se entendió con persona autorizada por quejosa	No contestó
Rosa Irene Carmona Jasso	18/01/2023 Se entendió con la quejosa	No contestó
Ruby del Carmen Holguín García	25/01/2023 Se entendió con la quejosa	No contestó
Marcos Rubén Portillo Muñoz	26/01/2023 Se entendió con el quejoso	No contestó
Noé Isael Sahagun Porras	18/01/2023 No se localizó al quejoso en el domicilio proporcionado Se notificó por estrados	No contestó
Elvira Ávila Camargo	18/01/2023 Se entendió con la quejosa	No contestó
Jacqueline Gómez Flores	19/01/2023 Se entendió con la quejosa	No contestó
Evelia Reyes Jiménez	19/01/2023 Se entendió con la quejosa	No contestó
Carolina Lara Morales	20/01/2023 La quejosa no atendió el citatorio Se notificó por estrados	No contestó
María Socorro Baeza Rodríguez	19/01/2023 Se entendió con la quejosa	No contestó ni formuló objeciones a la cédula de afiliación
Alex Leonel Alfaro López	24/01/2023	No contestó

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/RARM/JD06/SLP/55/2021

Persona notificada	Fecha de notificación	Fecha de contestación y alegatos
	Se entendió con persona autorizada por el quejoso	
Huciel Santiz López	24/01/2023 Se entendió con el quejoso	No contestó
Consuelo Guadalupe Martínez Ballinas	25/01/2023 Se entendió con la quejosa	No contestó
Fermina Ruiz Pérez	25/01/2023 Se entendió con persona autorizada por la quejosa	No contestó
Juana Gómez Vázquez	25/01/2023 Se entendió con persona autorizada por la quejosa	No contestó

X. VERIFICACIÓN DE ESTATUS REGISTRAL. En su oportunidad, la Unidad Técnica realizó una verificación al Sistema de Verificación del Padrón de Personas Afiliadas a los Partidos Políticos y corroboró que las personas quejosas fueron dadas de baja del padrón de militantes del PRD, sin que hubiesen sido reincorporadas al mismo.

XI. ELABORACIÓN DEL PROYECTO. En su oportunidad, al no existir diligencias pendientes por practicar, se ordenó la elaboración del proyecto de resolución correspondiente, para que fuera sometido a la consideración de las integrantes de la Comisión.

XII. SESIÓN DE LA COMISIÓN. En su Primera Sesión Extraordinaria de carácter privado, celebrada el veintidós de marzo de dos mil veintitrés, la Comisión analizó y aprobó el proyecto, por unanimidad de votos de sus integrantes presentes ordenando turnarlo a este Consejo General para su aprobación definitiva, y.

C O N S I D E R A N D O

PRIMERO. COMPETENCIA

El *Consejo General* es competente para resolver los procedimientos sancionadores ordinarios cuyos proyectos le sean turnados por la *Comisión*, conforme a lo dispuesto en los artículos 44, párrafo 1, incisos aa) y jj), y 469, párrafo 5, de la *LGIPE*.

En el caso, la conducta objeto de análisis en el presente procedimiento sancionador, consiste en la presunta transgresión a los artículos 6, apartado A, fracción II; 16, párrafo segundo; 35, fracción III, y 41, Base I, párrafo segundo, de la *Constitución*; en relación con los artículos 442, párrafo 1, inciso a); 443, párrafo 1, incisos a) y n); y 456, párrafo 1, inciso a), de la *LGIPE*; 2, párrafo 1, inciso b); 3, párrafo 2; 25, párrafo 1, incisos a), e) y u), y 29 de la *Ley de Partidos*, con motivo de la probable violación al derecho de libertad de afiliación de las personas quejosas, utilizando para ello indebidamente sus datos personales, por parte del *PVEM*.

Al respecto, es importante tomar en consideración que, conforme al artículo 25, párrafo 1, inciso a), de la *Ley de Partidos*, los partidos políticos deben conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta y la de sus militantes a los principios del Estado democrático, respetando la libre participación política de los demás partidos políticos y los derechos de los ciudadanos, correspondiendo al *INE* vigilar que las actividades de éstos se desarrollen con apego a la ley.

Del mismo modo, de conformidad con los artículos 442, párrafo 1, inciso a); y 443, párrafo 1, incisos a) y n), de la *LGIPE*, los partidos políticos son sujetos de responsabilidad por infracciones cometidas a las disposiciones contenidas en dicho ordenamiento jurídico, entre otras, el incumplimiento de las obligaciones señaladas en el párrafo que antecede, infracciones que son sancionables por el *Consejo General*.

En consecuencia, toda vez que corresponde a este órgano superior de dirección conocer de las infracciones a la normatividad electoral y, en su caso, imponer las sanciones atinentes, en el particular, esta autoridad resulta competente para

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/RARM/JD06/SLP/55/2021

conocer y resolver respecto de las infracciones denunciadas, atribuida al *PVEM*, consistente, esencialmente, en la presunta violación al derecho de libertad de afiliación y utilización indebida de datos personales de las personas quejasas.

Sirve de apoyo a lo anterior, lo sostenido por la *Sala Superior* en la sentencia dictada dentro del expediente *SUP-RAP-107/2017*, en el sentido de que esta autoridad electoral nacional es competente para resolver los procedimientos ordinarios sancionadores relacionados con la presunta afiliación indebida de ciudadanos a los partidos políticos, esencialmente, por las razones siguientes:

- Porque la tutela de la ley le corresponde de manera directa a las autoridades, no a los partidos.
- Porque, por mandato legal, el *INE* es una autoridad que tiene potestad para imponer sanciones en materia electoral federal por violación a la ley.
- Porque la existencia de un régimen sancionatorio intrapartidista, no excluye la responsabilidad de los partidos políticos por violación a la ley, ni la competencia del *INE* para atender tal cuestión.
- Porque la *Sala Superior* ya ha reconocido que el *INE* es el órgano competente para atender denuncias por afiliación indebida de militantes.

Lo anterior, con fundamento en lo previsto en los artículos 443, párrafo 1, inciso n), 459, 464, 467, 468 y 469, de la *LGIFE*, relacionados con lo dispuesto en los numerales 35, fracción III y 41, párrafo segundo, Base I, párrafo segundo, de la Constitución, es decir con base en el derecho humano a la libertad de afiliación en materia política.

SEGUNDO. CUESTIÓN PREVIA

Con el propósito de dar mayor claridad a resolución que nos ocupa, este Consejo General estima oportuno señalar que aun cuando la queja presentada por Francisco Javier Navarro Cañedo, fue admitida a trámite, no será objeto de pronunciamiento en el presente procedimiento atendiendo a los razonamientos siguientes.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/RARM/JD06/SLP/55/2021

Mediante proveído de cinco de febrero de la presente anualidad, esta autoridad radicó la queja presentada por Francisco Javier Navarro Cañedo en contra del Partido Verde Ecologista de México, por la indebida afiliación de la que presuntamente fue objeto.

No obstante lo anterior, resulta un hecho notorio para esta autoridad electoral nacional que en los archivos de la Unidad Técnica se encuentra registrado un procedimiento ordinario sancionador diverso al que nos ocupa, identificado con la clave UT/SCG/Q/JCMR/JD01/YUC/50/21, en el que se tramitó una queja presentada por el citado quejoso en contra del Partido Verde Ecologista de México por su probable indebida afiliación, esto es, por los mismos hechos denunciado en la causa que nos ocupa.

Al respecto, la autoridad sustanciadora escindió dicha queja con el propósito de que la inconformidad planteada por el ciudadano en mención fuera objeto de análisis en el diverso procedimiento UT/SCG/Q/JCMR/JD01/YUC/50/21, por ser éste el más antiguo, remitiendo para tal efecto las constancias de mérito, con el propósito de garantizar una justicia pronta y expedita y evitar resoluciones contrarias, además de prevenir la emisión de resoluciones que pudieran resultar contradictorias, además que trastocaría el principio *non bis in idem* (nadie puede ser juzgado dos veces por la misma causa o infracción), motivo por el cual este Consejo General no se pronunciara al respecto por haberlo hecho ya en dicho procedimiento.

TERCERO. NORMATIVA ELECTORAL APLICABLE AL CASO

En principio, este Consejo General no desconoce que el dos de marzo del año en curso, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el *Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y se expide la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral*;³⁰ sin embargo, dicho decreto, en su artículo Sexto transitorio, dejó sentado que Los procedimientos, medios de

³⁰ Consultable en: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5681325&fecha=02/03/2023#gsc.tab=0

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/RARM/JD06/SLP/55/2021

impugnación y actos jurídicos en general que se encuentren en trámite a la entrada en vigor del presente Decreto, se resolverán conforme a las disposiciones jurídicas, vigentes al momento de su inicio, por lo que al haberse instaurado el presente procedimiento sancionador **antes del dos de marzo de dos mil veintitrés** —como antes quedó de manifiesto—, las disposiciones materia de la publicación referida, no le resultan aplicables.³¹

Asimismo, en el presente asunto se debe subrayar que las presuntas faltas (indebida afiliación y uso indebido de datos personales) atribuidas al *PVEM*, se cometieron en diversas fechas, en las cuales tuvieron vigencia diversos ordenamientos jurídicos, sin perder de vista que todos ellos contienen exactamente las mismas reglas respecto al derecho a la libertad de afiliación a los partidos políticos, como se desarrollará con amplitud más adelante en este mismo instrumento resolutivo.

En efecto, conforme a lo anotado en el apartado de antecedentes de la presente resolución, la Unidad Técnica realizó diversas diligencias a fin de esclarecer la fecha de afiliación de las personas quejasas al *PVEM*, obteniéndose los resultados que se muestran en la siguiente tabla:

No.	Nombre	Fecha de Afiliación DEPPP	Fecha de afiliación PVEM	Fecha de cédula
1	Raúl Alicia Ramírez Méndez	18/12/2019	18/12/2019	03/10/2019
2	Francisco Eduardo García Donato	01/09/2019	01/09/2019	23/09/2019
3	Manuel Alejandro Acosta Márquez	15/07/2019	15/07/2019	12/07/2019
4	María Luz Adriana Esparza Esparza	21/08/2019	21/08/2019	25/07/2019
5	Armando Pompa Cruz	15/11/2016	15/11/2016	Sin cédula
6	Jahaziel Antonio García Torralba	05/11/2019	05/11/2019	05/11/2019
7	Inés Pineda Silverio	26/10/2016	26/10/2016	31/10/2016
8	Karen Alejandra Martínez Carmona	28/11/2019	28/11/2019	28/11/2017
9	Rosa Irene Carmona Jasso	28/11/2019	28/11/2019	28/11/2019
10	Ruby del Carmen Holguín García	03/10/2019	03/10/2019	Sin cédula

³¹ Decreto sobre el cual recayó una suspensión provisional por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la controversia constitucional 261/2023, promovida por este Instituto Nacional Electoral, y que fue notificada mediante oficio 2572/2023, de veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/RARM/JD06/SLP/55/2021

No.	Nombre	Fecha de Afiliación DEPPP	Fecha de afiliación PVEM	Fecha de cédula
11	Marcos Rubén Portillo Muñoz	04/10/2019	04/10/2019	Sin cédula
12	Noé Isael Sahagun Porras	13/06/2019	13/06/2019	Sin cédula
13	Elvira Ávila Camargo	27/09/2019	27/09/2019	27/09/2019
14	Jacqueline Gómez Flores	19/02/2020	19/02/2020	Sin cédula
15	Evelia Reyes Jiménez	30/06/2018	30/06/2018	Sin cédula
16	Carolina Lara Morales	11/02/2020	11/02/2020	Sin cédula
17	María Socorro Baeza Rodríguez	09/11/2016	09/11/2016	09/11/2016
18	Alex Leonel Alfaro López	28/03/2019	28/03/2019	28/03/2019
19	Huciel Santiz López	15/08/2019	15/08/2019	15/08/2019
20	Consuelo Guadalupe Martínez Ballinas	04/10/2019	04/10/2019	04/10/2019
21	Fermina Ruiz Pérez	02/09/2019	02/09/2019	02/09/2019
22	Juana Gómez Vázquez	29/10/2019	29/10/2019	29/10/2019

Del análisis de las quejas que motivaron el procedimiento que nos ocupa, se advierte que las personas quejasas fueron incorporadas al padrón de militante con posterioridad al veintitrés de mayo de dos mil catorce, esto es, después de la entrada en vigor de la LGIPE, por lo tanto, la licitud de las afiliaciones será analizada a la luz de dicho ordenamiento jurídico.

En cuanto a las reglas procedimentales aplicables al presente procedimiento, serán las contenidas en la LGIPE, al no contener disposición alguna en perjuicio de las partes.

Lo anterior, tomando en consideración la interpretación sistemática, funcional y armónica de los artículos Tercero y Sexto Transitorios del Decreto por el que se expide la LGIPE, en consonancia con la Jurisprudencia de rubro **RETROACTIVIDAD DE LAS NORMAS PROCESALES**³².

³²Véase <https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Documentos/Tesis/1012/1012265.pdf>

CUARTO. EFECTOS DEL ACUERDO INE/CG33/2019

Para los efectos de la resolución del asunto que nos ocupa, y con el propósito de conocer las razones que subyacen a la problemática de las indebidas afiliaciones cometidas por los partidos políticos en perjuicio del derecho político electoral de libre afiliación, es necesario mencionar que el veintitrés de enero de dos mil diecinueve, este *Consejo General* aprobó el acuerdo INE/CG33/2019, por el que se implementó un procedimiento para la revisión, actualización y sistematización de los padrones de los partidos políticos nacionales.

Las razones que motivaron la suscripción del mencionado acuerdo fueron las siguientes:

- a. La imposición de sanciones económicas que se venían aplicando a los partidos políticos por la transgresión al derecho de libre afiliación política **fue insuficiente para inhibir esta conducta.**
- b. **Los partidos políticos reconocieron la necesidad de iniciar un procedimiento de regularización de sus padrones de afiliación**, ya que éstos se conformaban sin el respaldo de la información comprobatoria de la voluntad ciudadana.
- c. La revisión que el *INE* hizo a los padrones de las y los militantes de los partidos políticos nacionales en dos mil catorce y dos mil diecisiete, se circunscribió a verificar **su número mínimo** de afiliadas y afiliados para la conservación de su registro y a vigilar que **no existiese doble afiliación**, a partidos políticos con registro o en formación.
- d. Dicha verificación **no tuvo como propósito revisar que los partidos políticos efectivamente contasen con el documento comprobatorio de la afiliación** de las y los ciudadanos en términos de lo previsto en su normativa interna.

Así, esta autoridad electoral nacional, con la finalidad de dar una solución integral al problema generalizado respecto de la correcta afiliación y desafiliación de las

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/RARM/JD06/SLP/55/2021

personas a los partidos políticos, y al mismo tiempo garantizar a la ciudadanía el pleno ejercicio de su derecho a la libre afiliación, así como fortalecer el sistema de partidos, estimó necesario implementar, de manera excepcional, un procedimiento para garantizar que, en un breve período, sólo se encuentren inscritas las personas que de manera libre y voluntaria hayan solicitado su afiliación, y respecto de las cuales se cuente con alguno de los documentos que avalen su decisión.

El proceso de actualización se concibió obligatorio y permanente, lo cual es indispensable y necesario para el sano desarrollo del régimen democrático de nuestro país.

Para alcanzar el objetivo propuesto en dicho acuerdo, se estableció una suspensión temporal en la resolución de los procedimientos ordinarios sancionadores, con las excepciones siguientes:

- Aquellos supuestos en los que se actualizara la caducidad de la potestad sancionadora de la autoridad administrativa electoral; o bien,
- Porque se encontrasen en la hipótesis de cumplimiento a una ejecutoria dictada por alguna de las Salas que integran el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Asimismo, previó una serie de actividades y obligaciones para los partidos políticos, que debían ser ejecutadas en el plazo comprendido entre el uno de febrero de dos mil diecinueve al treinta y uno de enero de dos mil veinte, cuyo incumplimiento tendría como efecto anular la suspensión de la resolución de los procedimientos e imponer las sanciones atinentes.

En este sentido, debe destacarse que durante la vigencia del referido Acuerdo, se procedió a eliminar de los padrones de militantes el registro de todas y cada una de las personas denunciadas en los procedimientos, tanto en el Sistema de Verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, como de sus portales de *internet* y/o cualquier otra base pública en que pudieran encontrarse, logrando eliminar el registro de más de nueve millones de personas.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/RARM/JD06/SLP/55/2021

Cabe señalar, que los padrones de afiliados y afiliadas, son bases de datos variables debido a los movimientos de altas y bajas que llevan a cabo todos los días los partidos políticos nacionales; además de ello, el proceso de verificación permanente de que son objeto los padrones, implica que los nuevos registros se compulsen contra el padrón electoral y entre los padrones de los partidos políticos con registro vigente y en proceso de constitución, para determinar si serán registros válidos, sujetos de aclaración o definitivamente descartados.

En suma, el acuerdo INE/CG33/2019, emitido por este Consejo General, tuvo como propósito ser un parteaguas que sentase las bases que permitieran transitar hacia padrones de militantes sólidos y confiables, para superar el alto número de afiliaciones indebidas encontradas antes de su aprobación, visto que, hasta ese momento, la pura imposición de multas no había sido una solución de fondo a la tutela del derecho fundamental de libertad de afiliación, propiciaba el fortalecimiento del régimen de partidos políticos.

En este sentido, el referido acuerdo delineó un régimen transitorio que permitiera a los institutos políticos consolidar sus padrones, a través del agotamiento de los procedimientos siguientes:

1. En cuanto a las afiliaciones recabadas **antes** de la aprobación del acuerdo INE/CG33/2019, los partidos políticos debían poner en estado de *reserva* la totalidad de su militancia, con el fin de verificar si contaban en su archivos con la documentación probatoria del consentimiento de los ciudadanos que figuraban como sus militantes.
2. Atinente a las afiliaciones, refrendos o ratificaciones recabados **después** de la entrada en vigor del acuerdo, los partidos políticos tienen la obligación de conservar el documento, ya sea físico o electrónico, que acredite la voluntad de la persona afiliada de ser integrada como militante del partido político respectivo, de manera que, en un escenario ideal, cada una de las afiliaciones o refrendos recabados a partir del veinticuatro de enero de dos mil diecinueve, estuviera debidamente soportada.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/RARM/JD06/SLP/55/2021

3. Por otro lado, en cuanto a la **depuración** de sus padrones, a partir de la aprobación del acuerdo, los partidos políticos debían examinar sus archivos para determinar respecto de cada uno de sus militantes, si contaban con la documentación que acreditara la legítima afiliación y, en caso de no contar con ella, buscar la ratificación de la militancia de las y los ciudadanos respectivos, a más tardar, el treinta y uno de enero de dos mil veinte y, de no lograrlo, dar de baja a la persona en cuestión; en caso de contar con la documentación respectiva, o bien obtener la ratificación de militancia, debían solicitar a la DEPPP la reversión del estatus de *reserva* a *válido*.
4. Asimismo, se ordenó **suspender la resolución** de los procedimientos ordinarios sancionadores cuya materia consistiera en la presunta indebida afiliación a los partidos políticos, hasta en tanto concluyeran las etapas previstas por el acuerdo, a fin de que este Consejo General pudiera contar con datos que revelaran la conducta observada por los institutos políticos durante y después de la vigencia del acuerdo multicitado, así como la realización de las actividades previstas en el mismo, y tomarlas en consideración al momento de resolver en definitiva el procedimiento respectivo y, en su caso, imponer una sanción proporcional no sólo a la comisión intrínseca de la falta, como hasta entonces, sino además, ponderara las medidas y acciones tomadas por los partidos políticos para resolver el problema subyacente.

QUINTO. ESTUDIO DE FONDO

Como se ha señalado con antelación, las personas quejas alegaron la violación a su derecho de afiliación libre y voluntaria para tomar parte en los asuntos públicos de país, así como el uso no autorizado de sus datos personales, en esencia, porque supuestamente fueron inscritas sin su consentimiento al padrón de militantes del *PVEM*.

1. Excepciones y defensas

Por su parte, el *PVEM* en sus distintas intervenciones procesales, medularmente, señaló en su defensa lo siguiente:

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/RARM/JD06/SLP/55/2021

- La queja presentada por Francisco Javier Navarro Cañedo debe desecharse en virtud de que dicho quejoso instauró una denuncia por los mismo hechos en contra del PVEM, la cual se encuentra tramitándose en el Procedimiento Ordinario Sancionador identificado con la clave UT/SCG/Q/JCMR/JD01/YUC/50/21.
- No existe indebida afiliación de las personas quejasas en virtud de que fueron incluidas en el padrón de militantes del PVEM de manera libre y voluntaria, lo cual se demuestra con el original de las cédulas de afiliación que obran en el sumario respecto de Raúl Alicia Ramírez Méndez, Francisco Eduardo García Donato, Manuel Alejandro Acosta Márquez, María Luz Adriana Esparza Esparza, Jahaziel Antonio García Torralba, Inés Pineda Silverio, Karen Alejandra Martínez Carmona, Rosa Irene Carmona Jasso, Elvira Ávila Camargo, María Socorro Baeza Rodríguez, Alex Leonel Alfaro López, Huciel Santiz López, Consuelo Guadalupe Martínez Ballinas, Fermina Ruiz Pérez y Juana Gómez Vázquez
- Que la DEPPP realizó una actualización del Sistema de Verificación del Padrón de personas afiliadas a los Partidos Políticos, llevando a cabo una migración de la información de los padrones de afiliados, teniendo como efecto que los registros cancelados antes del 11 de enero de 2021, ya no puedan ser consultados por los partidos políticos en el nuevo Sistema de Verificación del Padrón de personas afiliadas a los Partidos Políticos, lo que imposibilitó al PVEM saber si los quejosos del presente procedimiento cancelados en la fecha referida estuvieron afiliados a dicho instituto y, en su caso, la fecha de cancelación.
- No existe uso indebido de los datos personales de los quejosos ya que se utilizaron para los fines proporcionados por las y los inconformes.
- En la actualidad las personas quejasas se encuentran dadas de baja del padrón de militantes del PVEM dando cumplimiento a lo ordenado por la UTCE y el acuerdo INE/CG33/2019, lo cual debe considerarse al resolver el presente asunto.
- Por último, ofreció como medio de prueba el original de la cédula de afiliación de Manuel Alejandro Acosta Márquez y María Socorro Baeza Rodríguez, la documental pública consistente en copia simple del oficio

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/RARM/JD06/SLP/55/2021

INE/DEPPP/DE/DPPF/2198/2021, signado por el entonces Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos de este Instituto, Patricio Ballados Villagómez; así como la instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana.

Como se puede apreciar, los argumentos vertidos por el partido político en defensa de sus intereses, tanto al momento de contestar el emplazamiento, como en la rendición de alegatos, tienen que ver con el fondo de la controversia y no con cuestiones de procedencia de la vía, competencia de esta autoridad electoral nacional, o con la personalidad de la denunciante, por lo que sus argumentos serán analizados al realizar el estudio del caso concreto.

2. Materia del procedimiento

Con base en las posturas expresadas por las partes, la materia del procedimiento en el presente asunto estriba en determinar si el *PVEM* conculcó el derecho a la libre afiliación en materia política que corresponde a las personas quejasas, quienes alegaron no haber consentido estar en sus filas, vulnerando lo establecido en los artículos 6, apartado A, fracción II; 16, párrafo segundo; 35, fracción III, y 41, Base I, párrafo segundo, de la *Constitución*; 442, párrafo 1, inciso a); 443, párrafo 1, incisos a); 456, párrafo 1, inciso a); de la *LGIPE*; y 2, párrafo 1, inciso b), y 25, párrafo 1, incisos a), e), y y), de la *Ley de Partidos*.

3. Marco normativo

A efecto de determinar lo conducente respecto a la conducta en estudio, es necesario tener presente la legislación que regula los procedimientos de afiliación de las y los ciudadanos a los partidos políticos, específicamente por lo que respecta al denunciado, así como las normas relativas al uso y la protección de los datos personales de los particulares.

A) Constitución, tratados internacionales y ley

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo 6°

...

Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo se observará lo siguiente:

A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases: ...

*II. La información que se refiere a la vida privada y **los datos personales será protegida** en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.*

...

Artículo 16.

...

*Toda persona tiene derecho a la **protección de sus datos personales**, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros.*

...

Artículo 35. *Son derechos del ciudadano:*

...

*III. Asociarse individual y **libremente** para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país;*

...

Artículo 41.

...

I.

...

Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/RARM/JD06/SLP/55/2021

*que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, así como las reglas para garantizar la paridad entre los géneros, en candidaturas a legisladores federales y locales. Sólo los ciudadanos podrán formar partidos políticos y afiliarse **libre** e individualmente a ellos; por tanto, quedan prohibidas la intervención de organizaciones gremiales o con objeto social diferente en la creación de partidos y cualquier forma de afiliación corporativa.*

En esta medida, se considera que el derecho de asociación en materia político-electoral, como lo ha sostenido la *Sala Superior*, es un **derecho fundamental** consagrado en el artículo 35, fracción III, de la *Constitución*, el cual propicia el pluralismo político, así como la participación de la ciudadanía en la formación del gobierno.

En efecto, la libertad de asociación, que subyace en ese derecho, constituye una condición fundamental de todo Estado constitucional democrático, en el entendido de que sin su existencia, o de garantías constitucionales que lo tutelen, no solo se impediría la formación de partidos y agrupaciones políticas de diversos signos ideológicos, sino que el mismo principio constitucional de sufragio universal, establecido en forma expresa en el artículo 41, párrafo segundo, Base I, párrafo segundo, de la *Constitución*, quedaría socavado; por lo tanto, se puede concluir que el derecho de asociación en materia político-electoral, es la base de la formación de los partidos y asociaciones políticas.

De esta forma, todo ciudadano mexicano tiene derecho de asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país; específicamente, es potestad de las y los ciudadanos mexicanos constituir partidos políticos, así como afiliarse libre e individualmente a ellos, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 9; 35, fracción III; 41, fracciones I, párrafo segundo, *in fine*, y VI; y 99, fracción V, de la *Constitución*.

Ahora bien, el ejercicio de la libertad de asociación en materia política, prevista en el artículo 9 de la *Constitución*, está sujeto a varias limitaciones y una condicionante: las primeras están dadas por el hecho de que su ejercicio sea, por un lado, pacífico; y por otro, que tenga un objeto lícito, mientras que la última, circunscribe su realización a los sujetos que tengan la calidad de ciudadanos mexicanos, lo cual es

**CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/RARM/JD06/SLP/55/2021**

acorde con lo previsto en el artículo 33 de la *Constitución*. Asimismo, si el ejercicio de esa libertad se realiza a través de los partidos políticos, debe cumplirse con las formas específicas que se regulen legalmente para permitir su intervención en el Proceso Electoral.

En este tenor, el derecho de afiliación político-electoral establecido en el artículo 41, párrafo segundo, Base I, párrafo segundo, *in fine*, de la *Constitución*, es un derecho fundamental con un contenido normativo más específico que el derecho de asociación en materia política, ya que se refiere expresamente a la prerrogativa de las y los ciudadanos mexicanos para asociarse libre e individualmente a los partidos y agrupaciones políticas; y si bien el derecho de afiliación libre e individual a los partidos podría considerarse como un simple desarrollo del derecho de asociación en materia política, lo cierto es que el derecho de afiliación —en el contexto de un sistema constitucional de partidos como el establecido en el citado artículo 41 constitucional— se ha configurado como un derecho básico con caracteres propios.

Cabe señalar, además, que el derecho de afiliación comprende no sólo la potestad de formar parte de los partidos políticos y de las asociaciones políticas, sino también las de conservar o ratificar su afiliación o, incluso, desafiliarse. Del mismo modo, la libertad de afiliación no es un derecho absoluto, ya que su ejercicio está sujeto a una condicionante consistente en que sólo las y los ciudadanos mexicanos podrán afiliarse libre e individualmente a los partidos políticos. Igualmente, si el ejercicio de la libertad de afiliación se realiza a través de los institutos políticos, debe cumplirse con las formas específicas reguladas por el legislador para permitir su intervención en el Proceso Electoral.

Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis de Jurisprudencia **24/2002**, emitida por el *Tribunal Electoral*, de rubro **DERECHO DE AFILIACIÓN EN MATERIA POLÍTICO-ELECTORAL. CONTENIDO Y ALCANCES**³³.

Conviene tener presente que la afiliación libre e individual a los partidos políticos fue elevada a rango constitucional mediante la reforma publicada en el Diario Oficial

³³ Consultable en la <http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=24/2002&tpoBusqueda=S&sWord=24/2002>

**CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/RARM/JD06/SLP/55/2021**

de la Federación de veintidós de agosto de mil novecientos noventa y seis, cuando se estableció que los partidos políticos, en tanto organizaciones de ciudadanos, tienen como fin hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo a los programas, principios e idearios que postulan; y que únicamente las y los ciudadanos pueden afiliarse a los institutos políticos, libre e individualmente.

Esta reforma, conforme al contenido de la exposición de motivos correspondiente³⁴, tuvo como propósito proteger el derecho constitucional de los mexicanos a la libre afiliación a partidos y asociaciones políticas, garantizando que se ejerza en un ámbito de libertad plena y mediante la decisión voluntaria de cada ciudadano, complementando el artículo 35, fracción III constitucional, que ya preveía, desde mil novecientos noventa —reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de seis de abril del citado año—, como un derecho público subjetivo de los ciudadanos, asociarse para tomar parte en los asuntos políticos del país; disposición que ha permanecido incólume desde entonces en el texto de la Ley Fundamental.

En el ámbito internacional, el derecho de libre asociación —para conformar una asociación— y afiliación —para integrarse a una asociación ya conformada—, como derechos políticos electorales, se encuentran consagrados en diversos instrumentos suscritos por nuestro país, tal es el caso de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y la Convención Americana Sobre Derechos Humanos.

En efecto, la Organización de las Naciones Unidas, a través de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de diez de diciembre de mil novecientos cuarenta y ocho, reconoció en su artículo 20, que toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas; y que nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación.

En el mismo sentido, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó el dieciséis de diciembre de mil novecientos sesenta y seis, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, mismo que estableció en su artículo 22, que toda persona tiene

³⁴ Consultable en la página: https://www.sitios.scjn.gob.mx/constitucion1917-2017/sites/default/files/CPEUM_1917_CC/proclLeg/136%20-%2022%20AGO%201996.pdf

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/RARM/JD06/SLP/55/2021

derecho a asociarse libremente con otras, incluso el derecho a fundar sindicatos y afiliarse a ellos para la protección de sus intereses.

En congruencia con lo anterior, la Organización de Estados Americanos suscribió en San José de Costa Rica, en noviembre de mil novecientos sesenta y nueve, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, misma que establece en su artículo 16, en lo que al tema interesa, que todas las personas tienen derecho a asociarse libremente con fines ideológicos, religiosos, políticos, económicos, laborales, sociales, culturales, deportivos o de cualquiera otra índole.

Esto es, la tradición jurídica internacional reconoce el derecho fundamental de asociarse libremente y a no ser obligado a formar parte de una colectividad, hace más de siete décadas; y el de formar grupos organizados y permanentes (de asociarse) para tomar parte en los asuntos políticos de su nación, hace más de cinco.

En el espacio nacional, no obstante que el derecho de afiliación libre e individual a los partidos políticos se incorporó al texto fundamental en la década de los noventa del siglo pasado, la legislación secundaria, como sucede con la regulación internacional, tiene una larga tradición en la protección de la voluntad libre de los ciudadanos para ser parte de un partido político.

En efecto, la Ley de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales, publicada el cinco de enero de mil novecientos setenta y tres, hace ya cuarenta y ocho años, estableció en su artículo 23, fracción II, numeral 1, incisos a) y b), un mecanismo de certeza encaminado a dar cuenta de que los ciudadanos afiliados a una agrupación política, como precursor de un partido político, habían consentido ser incorporados al respectivo padrón de militantes, como se advierte enseguida:

“Artículo 23. Para que una agrupación pueda constituirse y solicitar posteriormente su registro como Partido Político Nacional, en términos del artículo 24 de esta ley, es necesario que satisfaga los siguientes requisitos:

I...

**CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/RARM/JD06/SLP/55/2021**

II. Haber celebrado cuando menos en cada una de las dos terceras partes de las entidades de la República, una asamblea en presencia de un juez, notario público o funcionario que haga sus veces quien certificará:

1. Que fueron exhibidas listas nominales de afiliados de la entidad respectiva, clasificadas por municipios o delegaciones, las que deberán contener:

*a. En cada hoja un encabezado impreso cuyo texto exprese que las personas listadas han quedado plenamente enteradas de la declaración de principios, programa de acción y Estatutos, y que **suscriben el documento como manifestación formal de afiliación**, y*

*b. El nombre y apellidos, domicilio, ocupación, número de credencial permanente de elector y **firma de cada afiliado o huella digital en caso de no saber escribir.***

En términos semejantes, la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales, promulgada el veintiocho de diciembre de mil novecientos setenta y siete, estableció en su artículo 27, fracción III, inciso a), que, entre otros requisitos a cubrir para que una organización pudiese constituirse como partido político, debía celebrar un determinado número de asambleas distritales o estatales, en las que un Juez Municipal, de Primera Instancia o de Distrito; notario público o funcionario acreditado por la entonces Comisión Federal Electoral, certificara que los afiliados que asistieron, aprobaron los documentos básicos respectivos y **suscribieron el documento de manifestación formal de afiliación.**

Esta línea fue continuada por el Código Federal Electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de febrero de mil novecientos ochenta y siete, mismo que también contemplaba en su artículo 34, fracción II, que era un requisito para constituirse como Partido Político Nacional, haber celebrado el número de asambleas en cada una de las entidades federativas o Distritos Electorales previsto en dicha norma, en las cuales un notario o servidor público autorizado, certificara que los afiliados, además de haber aprobado la declaración de principios, programa de acción y los Estatutos, **suscribieron el documento de manifestación formal de afiliación.**

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/RARM/JD06/SLP/55/2021

En esta línea de tiempo, es pertinente destacar el *COFIPE* de mil novecientos noventa.

Dicha norma, para el caso que nos ocupa, guarda una importancia singular, puesto que en ella, por primera vez, se previó de manera expresa lo siguiente:

- Que es derecho de las y los ciudadanos mexicanos constituir Partidos Políticos Nacionales y agrupaciones políticas y afiliarse a ellos individual y **libremente**, en su artículo 5, párrafo 1;
- Que los Estatutos de los institutos políticos establecerán, entre otras cuestiones, los procedimientos para la **afiliación** individual, **libre** y pacífica de sus miembros, en su artículo 27, párrafo 1, inciso b);
- Que era obligación de los Partidos Políticos Nacionales, **cumplir sus normas de afiliación**, ello en el artículo 38, párrafo 1, inciso e); y
- Que los partidos y agrupaciones políticas, podían ser sancionados con amonestación pública, multa de 50 a 5 mil días de salario mínimo, reducción de hasta el 50% de las ministraciones del financiamiento público que les correspondiera, la supresión total de la entrega de las ministraciones del financiamiento, la suspensión de su registro como partido o agrupación política, e incluso con la cancelación de su registro, entre otros supuestos, **cuando incumplieran con sus obligaciones**, señaladas en el artículo 38 antes mencionado.

Por otro lado, conviene dejar establecido que este mismo *Código*, en su artículo 38, párrafo 1, inciso c), establecía, como lo hizo más tarde el *COFIPE* de quince de enero de dos mil ocho y actualmente la *LGIFE*, que es obligación de los Partidos Políticos Nacionales mantener el mínimo de afiliados en las entidades federativas o Distritos Electorales, requeridos para su constitución y registro.

B) Lineamientos para la verificación de afiliados

En congruencia con lo anterior, para llevar a cabo la verificación del padrón de afiliados de los partidos políticos, la autoridad electoral nacional, el trece de septiembre de dos mil doce, emitió el Acuerdo del *Consejo General* del otrora Instituto Federal Electoral por el que, en acatamiento a la sentencia emitida por la *H. Sala Superior* en el expediente **SUP-RAP-570/2011**, se aprobaron los *Lineamientos para la verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos Nacionales para la conservación de su Registro (CG617/2012)*.

De ahí que la *DERFE* y la *DEPPP*, en el año de dos mil catorce, iniciaron un procedimiento de verificación de los padrones de afiliados de los Partidos Políticos Nacionales, con la finalidad de comprobar si los mismos contaban con el mínimo de adeptos en las entidades federativas o Distritos Electorales requeridos para su constitución y registro.

Así, de las disposiciones contenidas en los Lineamientos mencionados, se obtienen las siguientes conclusiones respecto al procedimiento para la verificación del padrón de los Partidos Políticos Nacionales:

- La *DEPPP* (en coordinación con la Unidad de Servicios de Informática y la *DERFE*), desarrollará un sistema de cómputo, en el cual los Partidos Políticos Nacionales deben realizar la captura de los datos mínimos y actuales de todos sus afiliados.
- La *DEPPP*, informará mediante oficio a la *DERFE* que el padrón de afiliados del partido político que corresponda, se encuentra en condiciones de ser verificado.
- La *DERFE*, procederá a realizar la verificación conforme a sus Lineamientos, obteniendo un Total preliminar de afiliados, el cual deberá entregar a la *DEPPP*.
- Recibidos los resultados de la verificación, la *DEPPP* deberá remitir a los partidos políticos, las listas en las que se señalen los datos de los afiliados

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/RARM/JD06/SLP/55/2021

que se encuentren duplicados en dos o más partidos, para que manifiesten lo que a su derecho convenga.

- Recibida la respuesta de los partidos políticos, la *DEPPP* (en coordinación con la *DERFE*), analizará cuáles registros pueden sumarse al total preliminar de afiliados, para obtener el número total de afiliados del partido; asimismo, deberán señalar que en aquellos casos en los que se encuentren afiliados a su vez a algún otro partido político con registro, para que puedan ser sumados al total de afiliados del partido, éste deberá presentar escrito con firma autógrafa del ciudadano, en el que manifieste su deseo de continuar afiliado al partido político que corresponda y renuncia a cualquier otro.
- En caso de que más de un partido político presentara el documento a que se refiere el párrafo que antecede, la *DEPPP*, con el apoyo de las Juntas Locales y Distritales del Instituto, solicitará por oficio al ciudadano en cuestión, que decida cuál es el partido al que desea continuar afiliado, apercibido de que, en caso de no hacerlo, se eliminará del padrón de afiliados de los partidos en los que se encontró registrado.

En torno a ello, es preciso no perder de vista que el propósito central de los mencionados Lineamientos, consistió en regular el procedimiento para determinar si los partidos políticos con registro nacional contaban o no con el mínimo de afiliados exigido por la ley para la conservación de su registro, pero en modo alguno constituyen la fuente de la obligación de los partidos políticos para cumplir la normatividad general y la interna de cada uno de ellos, ni mucho menos para respetar el derecho de libre afiliación de las y los ciudadanos, pues, como se señaló, tal derecho emana de la Constitución, de los instrumentos internacionales y de la ley.

Esto es, los Lineamientos para la verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos Nacionales para la conservación de su Registro, únicamente constituye el instrumento normativo al que se deberán apegar tanto los partidos políticos como las diversas instancias del *INE* involucradas en la verificación del requisito legal para la conservación del registro de los Partidos Políticos Nacionales, que describe las etapas a que se sujetará el procedimiento de verificación y las áreas de

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/RARM/JD06/SLP/55/2021

responsabilidad de cada uno de los sujetos que intervienen, pero en modo alguno significa que la obligación de los partidos políticos de respetar el derecho de libre afiliación a sus filas encuentre sustento en dicho instrumento, ni mucho menos que dicha obligación haya nacido a la par de los Lineamientos mencionados.

Al respecto, si bien tal ordenamiento contiene distintas previsiones en lo referente a la afiliación de las y los ciudadanos, la responsabilidad de respetar de manera irrestricta la libertad de los ciudadanos de afiliarse, permanecer afiliado, desafiliarse de un partido político, o bien, no pertenecer a ninguno, proviene directamente de la *Constitución*, instrumentos internacionales y del *COFIPE*, cuyas disposiciones son previas a la emisión de dichos Lineamientos y de un rango superior, por lo que resultaría impreciso afirmar que previo a la emisión de la norma reglamentaria, los partidos políticos no tenían la carga de obtener y conservar la documentación idónea para poner en evidencia que la afiliación de un determinado ciudadano estuvo precedida de su libre voluntad, como se desarrollará más adelante.

Así, la operación del procedimiento de verificación puede poner al descubierto la afiliación a uno o varios partidos políticos de un ciudadano determinado, quien, de estimarlo pertinente, podrá cuestionar la o las afiliaciones que considere fueron ilegítimas, correspondiendo al partido en cuestión demostrar que, previo a la incorporación del individuo a sus filas, acató las disposiciones de la Constitución y la Ley, mediante los documentos donde conste la libre voluntad del ciudadano de ser afiliado al partido político que lo reportó como militante para demostrar que cuenta con los afiliados necesarios para conservar su registro.

De lo anterior, es posible advertir que la línea evolutiva que ha seguido el derecho de libre afiliación para tomar parte en los asuntos políticos del país, ha seguido una tendencia encaminada a garantizar, cada vez de mejor manera, que los ciudadanos gocen de libertad absoluta para decidir su ideario político y, en congruencia con él, determinar si desean o no afiliarse a un partido político y a cuál, así como abandonarlo o permanecer al margen de todos, pues la regulación respectiva ha transitado desde la publicación de listas de afiliados, a fin de asegurar que los ciudadanos conozcan su situación respecto de un instituto político en particular, hasta la obligación de éstos de comprobar fehacientemente, a través de documentos idóneos y específicos, que la incorporación de una persona al padrón

de militantes de un instituto político fue solicitada por el ciudadano, como expresión de su deseo libre de participar activamente, por ese canal, en la vida pública de la nación.

C) Normativa interna del PVEM

A efecto de tener mayor claridad acerca del proceso que un ciudadano o ciudadana debe llevar a cabo para convertirse en militante del denunciado, resulta necesario analizar la norma interna del partido político, para lo cual, enseguida se transcribe la parte conducente de los Estatutos del PVEM.

CAPÍTULO II

**De los Procedimientos para Afiliación de sus Militantes,
Adherentes y Simpatizantes**

Artículo 2.

...

La afiliación al Partido Verde Ecologista de México es **individual, personal, intransferible, libre y pacífica**. En tal virtud y por tratarse de un Partido Político Nacional, en el cual sus afiliados, militantes, simpatizantes y adherentes participan en forma personal y voluntaria, en el ejercicio de las actividades políticas que se encuentran consideradas en el artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como prerrogativas de los ciudadanos, la simple afiliación a este Instituto Político de ninguna manera podrá generar derechos laborales.

CAPÍTULO XVIII

Del Registro de Afiliación

Artículo 87. El presente capítulo tiene como finalidad regular los procesos de afiliación y participación de los militantes, adherentes y simpatizantes del Partido Verde Ecologista de México a nivel nacional, estatal, municipal y delegacional.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/RARM/JD06/SLP/55/2021

Artículo 88. El proceso de afiliación es responsabilidad del Consejo Político Nacional, que tiene la obligación de llevarlo a cabo con apego a la normatividad respectiva.

Artículo 99. Para ser adherente es necesario tener 15 años cumplidos al día de la solicitud correspondiente, y tratándose de personas que tengan 18 años o más, aparte del trámite de solicitud tendrán que presentar su credencial para votar con fotografía.

Artículo 100. La persona interesada deberá presentar la solicitud ante el Comité Ejecutivo Estatal correspondiente cumpliendo con los requisitos que establecen los presentes Estatutos.

D) Normativa emitida por este Consejo General

➤ **Acuerdo INE/CG33/2019**

Ahora bien, resulta importante precisar la determinación que respecto de las afiliaciones y los padrones de militantes de los partidos políticos asumió el órgano máximo de dirección del *INE*, al emitir el acuerdo registrado con la clave **INE/CG33/2019**, por el cual se aprobó *“la implementación de manera excepcional de un procedimiento para la revisión, actualización y sistematización de los padrones de afiliadas y afiliados de los Partidos Políticos Nacionales”*, ello derivado de la vinculación que tiene con la materia de la probable infracción que se analiza en el procedimiento al rubro indicado.

C O N S I D E R A N D O

...

10. Justificación del Acuerdo.

...

Con la información anterior, tenemos que derivado de la publicación de los padrones de afiliadas y afiliados a los partidos políticos, desde 2014 a la fecha, el INE ha recibido diversas quejas presentadas por la ciudadanía por indebida afiliación en todos y cada uno de los PPN³⁵, toda vez que las personas ciudadanas pueden revisar si están o no afiliadas a algún partido político y

³⁵ Partidos Políticos Nacionales.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/RARM/JD06/SLP/55/2021

puede darse el caso de ciudadanas y ciudadanos que, por algún interés particular, se vean afectados al encontrarse registrados como militantes de estos, tal es el caso de las personas interesadas para ser contratadas como Capacitadores Asistentes Electorales o cuando se convoca para ser designados como Consejeras y Consejeros de los Consejos Locales y Distritales del INE, o para integrar los OPLE.

Así, se puede evidenciar que, en distintos periodos, todos y cada uno de los partidos políticos que han tenido registro a nivel nacional, han sido sancionados por indebidas afiliaciones.

Ello evidencia que los padrones de militantes de los PPN no están lo suficientemente actualizados ni sistematizados con la documentación que acredite la afiliación. Lo cual genera que resulten fundados los casos de indebidas afiliaciones, debido a que los partidos políticos no acreditan en forma fehaciente que las y los ciudadanos efectivamente se afiliaron a determinado partido, o bien, porque los partidos políticos no tramitan las renunciaciones que presentan sus afiliadas y afiliados y, por tanto, no los excluyen del padrón de militantes.

Ahora bien, esta autoridad considera que la imposición de sanciones económicas ha sido insuficiente para inhibir la indebida afiliación de personas a los PPN, ya que ésta continúa presentándose. Incluso, los propios PPN reconocen que es necesario iniciar un procedimiento de regularización de sus padrones de afiliación ya que la falta de documentos se debe a diversas circunstancias; es decir, el hecho de que el INE sancione a los PPN no ha servido para solucionar el problema de fondo, que consiste en la falta de rigor en los procedimientos de afiliación y administración de los padrones de militantes de todos los PPN, en tanto que la mayoría de ellos no cuentan con las respectivas cédulas de afiliación.

...

*Así las cosas, con la finalidad de atender el problema de fondo y al mismo tiempo garantizar a la ciudadanía el pleno ejercicio de su derecho a la libre afiliación, aunado a que en el mes de enero de dos mil diecinueve inició el procedimiento para la constitución de nuevos PPN (lo que implica que la o el ciudadano que aparece registrado como militante de algún PPN, no puede apoyar la constitución de algún nuevo partido) y en aras de proteger el derecho de libre afiliación de la ciudadanía en general, la que milita y la que no y fortalecer el sistema de partidos, **se estima necesario aprobar la implementación de manera excepcional de un procedimiento de revisión, actualización y sistematización de los padrones de militantes de los PPN***

que garantice que, en un breve período, solamente aparezcan en éstos las y los ciudadanos que en realidad hayan solicitado su afiliación, y respecto de los cuales se cuente con alguno de los documentos referidos en el considerando 12, numeral 3. En el entendido de que el proceso de actualización debe ser obligatorio y permanente conforme a los Lineamientos referidos en los Antecedentes I y II.

Con ello, no sólo se protegen y garantizan los derechos político-electorales de las personas, sino se fortalece el sistema de partidos, el cual es indispensable y necesario para el sano desarrollo del régimen democrático de nuestro país.

...

A C U E R D O

PRIMERO. *Se ordena el inicio del procedimiento de revisión, actualización y sistematización de los padrones de las personas afiliadas a los PPN, el cual tendrá vigencia del uno de febrero de dos mil diecinueve al treinta y uno de enero de dos mil veinte, y se aprueba el Formato para solicitar la baja del padrón de militantes del PPN que corresponda, mismo que forma parte integral del presente Acuerdo como Anexo Único.*

SEGUNDO. *Las Direcciones Ejecutivas del Registro Federal de Electores y de Prerrogativas y Partidos Políticos llevarán a cabo los trabajos necesarios y pertinentes que permitan implementar el servicio a la ciudadanía de solicitar su baja del padrón de afiliadas y afiliados a un PPN, en cualquier oficina de este Instituto.*

TERCERO. *Los PPN darán de baja definitiva de manera inmediata de su padrón de militantes los nombres de aquellas personas que, antes de la aprobación de este Acuerdo, hayan presentado quejas por indebida afiliación o por renunciadas que no hubieran tramitado. En el caso de las quejas por los supuestos antes referidos que se lleguen a presentar con posterioridad a la aprobación de este Acuerdo, los PPN tendrán un plazo de 10 días contado a partir del día siguiente de aquel en el que la UTCE les haga de su conocimiento que se interpuso ésta, para dar de baja de forma definitiva a la persona que presente la queja.*

CUARTO. *Los PPN deberán cancelar el registro de las y los ciudadanos que hubieren presentado la solicitud de baja del padrón, con independencia de que cuenten o no con el documento que acredite la afiliación, para garantizar el cumplimiento de la última voluntad manifestada.*

QUINTO. *Los PPN cancelarán los registros de aquellas personas respecto de las cuales no cuenten con la cédula de afiliación, refrendo o actualización una vez concluida la etapa de ratificación de voluntad de la ciudadanía. La baja no podrá darse en contra de la voluntad de la o el afiliado.*

[Énfasis añadido]

E) Protección de datos personales

De los artículos 6º, Apartado A, fracción II, y 16, párrafo segundo, de la *Constitución*, se desprende el derecho de toda persona, a que en nuestro país se proteja su información privada y sus datos personales, y de igual manera, a manifestar su oposición a la utilización no autorizada de su información personal.

Lo anterior, se robustece con el criterio sostenido por la Sala Superior, al resolver el recurso de apelación identificado con la clave SUP-RAP-141/2018, en el que determinó, entre otras cuestiones, lo siguiente:

“...los datos personales de los militantes de los partidos políticos se consideran públicos si son precedidos de la voluntad del ciudadano para afiliarse; por tanto, si es deseo de un ciudadano pertenecer a un partido político, no puede alegar que existe uso indebido de sus datos personales porque se consideran públicos.”

En cambio, si no existe una libre y voluntaria afiliación del ciudadano de pertenecer al partido político, el uso de datos personales al integrar el padrón de militantes es indebido, porque la información ahí contenida deja de ser pública respecto de quienes no tenían ese deseo de afiliarse al partido y, se insiste, aparecer en un padrón al cual no deseaban pertenecer...”

Conclusiones

De la interpretación gramatical, sistemática y funcional de las normas transcritas, se pueden obtener las conclusiones siguientes:

- El derecho de afiliación en materia política-electoral consiste, fundamentalmente, en la prerrogativa de los ciudadanos mexicanos para decidir libre e individualmente si desean o no formar parte de los partidos y agrupaciones políticas.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/RARM/JD06/SLP/55/2021

- Afiliado o Militante es la o el ciudadano que en pleno goce y ejercicio de sus derechos político-electorales se registra libre, voluntaria e individualmente a un partido político.
- Las y los militantes tienen el derecho de refrendar o renunciar a su militancia.
- La información que sea requerida en términos distintos a los señalados será atendida de acuerdo con las disposiciones del Partido en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
- Las ciudadanas y ciudadanos de la república tienen el derecho elegir libremente si desean permanecer como afiliados de un determinado partido político o ser dados de baja del mismo, si expresan su voluntad en ese sentido.
- La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.
- Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y a su cancelación, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger derechos de terceros.
- Los partidos políticos, como sujetos obligados por la ley, deberán contemplar en sus Estatutos la forma de garantizar la protección de los datos personales de sus militantes, así como los derechos al acceso, rectificación, cancelación y oposición de estos.
- En el Acuerdo INE/CG33/2019, se ordenó instaurar, de manera excepcional, un procedimiento de revisión, actualización y sistematización de los padrones de militantes de los Partidos Políticos Nacionales, para garantizar que únicamente

aparezcan en éstos las y los ciudadanos que en realidad hayan solicitado su afiliación.

- En la referida determinación, se instruyó a los partidos políticos que, de manera inmediata, dieran de baja definitiva de su padrón de militantes, los datos de aquellas personas que, anterior a la emisión del Acuerdo aludido, hayan presentado queja por indebida afiliación o por renuncia que no hubieran tramitado.

4. Carga y estándar probatorio sobre indebida afiliación a un partido político

De conformidad con lo expuesto en el punto inmediato anterior, es válido concluir que cuando un ciudadano pretenda, libre y voluntariamente, ser registrado como militante del *PVEM*, por regla general **debe acudir a las instancias partidistas competentes, suscribir una solicitud de afiliación y proporcionar la información necesaria para su afiliación, a fin de ser registrado en el padrón respectivo.**

En consecuencia, por regla general, los partidos políticos (en el caso el *PVEM*), tienen la carga de conservar y resguardar, con el debido cuidado, los elementos o la documentación en la cual conste que el ciudadano en cuestión acudió a solicitar su afiliación y que la misma fue libre y voluntaria, puesto que —se insiste— le corresponde la verificación de dichos requisitos y, por tanto, el resguardo de las constancias atinentes, a fin de proteger, garantizar y tutelar el ejercicio de ese derecho fundamental y, en su caso, probar que las personas afiliadas al mismo cumplieron con los requisitos constitucionales, legales y partidarios.

Lo mismo ocurre con aquellos documentos por medio de los cuales, acrediten haber dado trámite a las solicitudes de desafiliación correspondientes; pues son indispensables para sus procesos de depuración de los padrones de militantes.

Esta conclusión es armónica con la obligación de mantener el mínimo de militantes requerido por las leyes para su constitución y registro, de acuerdo con lo establecido en el artículo 25, párrafo 1, inciso c), de la Ley de Partidos.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/RARM/JD06/SLP/55/2021

En suma, los partidos políticos, en tanto entidades de interés público que sirven de vehículo para el acceso de la ciudadanía al poder y espacio para el ejercicio del derecho humano de afiliación en materia política-electoral, están obligados a respetar, proteger y garantizar el ejercicio de ese derecho fundamental, para lo cual deben verificar y revisar, en todo momento, que la afiliación se realiza de manera libre, voluntaria y personal y, consecuentemente, conservar y resguardar los elementos o documentación en donde conste esa situación, a fin de estar en condiciones de probar ese hecho y de cumplir con sus obligaciones legales en materia de constitución y registro partidario.

Bajo esta lógica, es dable sostener que, en principio, corresponde al partido político demostrar que sus militantes y afiliados manifestaron su consentimiento, libre y voluntario para formar parte de su padrón, a través de los documentos y constancias respectivas que son los medios de prueba idóneos para ese fin, y que además los titulares de los datos personales le proporcionaron los mismos para esa finalidad, incluso tratándose de aquellas afiliaciones realizadas con anterioridad a la entrada en vigor de cualquier instrumento administrativo, cualquiera que haya sido su objeto, porque, se insiste:

- El derecho humano de libre afiliación política está previsto y reconocido en la *Constitución*, tratados internacionales y leyes secundarias, desde décadas atrás y tienen un rango superior a cualquier instrumento administrativo.
- Los partidos políticos sirven de espacio para el ejercicio de este derecho fundamental y, consecuentemente, a éstos corresponde demostrar que las personas que lo integran expresaron una decisión individual y libre.
- La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.
- Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y a su cancelación, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/RARM/JD06/SLP/55/2021

nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger derechos de terceros.

- La emisión y operación de Lineamientos para la verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos Nacionales, tiene como objeto principal revisar el mantenimiento de un número mínimo de afiliados que exige la ley, pero no es un instrumento del que nazca la obligación de los partidos políticos de garantizar la libre afiliación, ni mucho menos para marcar el tiempo a partir del cual los institutos políticos deben conservar los elementos para demostrar lo anterior.

Esta conclusión es acorde con lo sostenido por la *Sala Superior*, al resolver el recurso de apelación radicado con la clave de expediente **SUP-RAP-107/2017**³⁶, donde estableció que la presunción de inocencia es un principio que debe observarse en los procedimientos sancionadores, conforme a su Tesis de Jurisprudencia 21/2013, de rubro **PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE OBSERVARSE EN LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES ELECTORALES**,³⁷ el cual tiene distintas vertientes, entre las que destacan, por su trascendencia para el caso que nos ocupa, como regla probatoria³⁸ y como estándar probatorio,³⁹ como se ilustra en los párrafos subsecuentes.

En el primer aspecto —*regla probatoria*— implica destacadamente **quién debe aportar los medios de prueba** en un procedimiento de carácter sancionador, esto es, envuelve las reglas referentes a la actividad probatoria, principalmente las correspondientes a la carga de la prueba, a la validez de los medios de convicción y a la valoración de pruebas.

³⁶ Consultable en la página de internet del *Tribunal Electoral*, o bien en la dirección electrónica: http://www.te.gob.mx/Informacion_judicial/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0107-2017.pdf

³⁷ Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 6, Número 13, 2013, páginas 59 y 60.

³⁸ Tesis de Jurisprudencia: “**PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO REGLA PROBATORIA**”. 10ª Época; Primera Sala, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Libro 5, abril de 2014, Tomo I, página 478, número de registro 2006093.

³⁹ Véase la Tesis de jurisprudencia de rubro: “**PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO ESTÁNDAR DE PRUEBA**”. 10ª Época; Primera Sala, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Libro 5, abril de 2014, Tomo I, página 476, número de registro 2006091. Véase la nota 35.

En el segundo matiz —*estándar probatorio*— es un criterio para concluir **cuándo se ha conseguido la prueba de un hecho**, lo que en materia de sanciones se traduce en definir las condiciones que debe reunir la prueba de cargo para considerarse suficiente para condenar.

Al respecto, la sentencia en análisis refiere que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación⁴⁰, ha estimado que es posible derrotar la presunción de inocencia **cuando las pruebas de cargo desvirtúen la hipótesis de inocencia alegada por el presunto responsable, así como las pruebas de descargo y los indicios que puedan generar una duda razonable sobre la hipótesis de culpabilidad sustentada por la parte acusadora.**

Mutatis mutandis, en la materia sancionadora electoral, la *Sala Superior* consideró en la sentencia referida que, para superar la presunción de inocencia, en su vertiente de estándar probatorio, es necesario efectuar un análisis de las probanzas integradas en el expediente a fin de corroborar que:

- La hipótesis de culpabilidad alegada por los denunciados sea capaz de explicar los datos disponibles en el expediente, integrándolos de manera coherente.
- Se refuten las hipótesis admisibles de inocencia del acusado.

Así, cuando la acusación de algún ciudadano versa sobre la afiliación indebida a un partido político, por no haber mediado su consentimiento, se deben satisfacer dos elementos:

- Que existió una afiliación al partido.

⁴⁰ Véanse las tesis **PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO ESTÁNDAR DE PRUEBA. CONDICIONES PARA ESTIMAR QUE EXISTE PRUEBA DE CARGO SUFICIENTE PARA DESVIRTUARLA, PRESUNCIÓN DE INOCENCIA**, así como **DUDA RAZONABLE. FORMA EN LA QUE DEBE VALORARSE EL MATERIAL PROBATORIO PARA SATISFACER EL ESTÁNDAR DE PRUEBA PARA CONDENAR CUANDO COEXISTEN PRUEBAS DE CARGO Y DE DESCARGO.**

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/RARM/JD06/SLP/55/2021

- Que no medió la voluntad del ciudadano en el proceso de afiliación.

En cuanto al primer aspecto, opera la regla general relativa a que “*el que afirma está obligado a probar*” misma que, aun cuando no aparece expresa en la ley sustantiva electoral, conforme al artículo 441 de la *LGPE*, resulta aplicable supletoriamente el artículo 15, párrafo 2, de la *Ley de Medios*, lo que implica, que la denunciante tiene en principio la carga de justificar que fue afiliada al partido denunciado.

Respecto al segundo elemento, la prueba directa y que de manera idónea demuestra que una persona está afiliada voluntariamente a un partido **es la constancia de inscripción respectiva**, esto es, el documento donde se asienta la expresión de que un ciudadano desea pertenecer a un instituto político determinado.

Así, cuando en las denuncias que dieron lugar al presente procedimiento sancionador, las personas quejas alegaron que **no dieron su consentimiento** para pertenecer a un partido, sostienen también que no existe la constancia de afiliación atinente, de manera que las personas denunciadas no están obligadas a probar un hecho negativo (la ausencia de voluntad) o la inexistencia de una documental, pues en términos de carga de la prueba, **no son objeto de demostración los hechos negativos**, sino conducen a que quien afirme que la incorporación al padrón de militantes estuvo precedida de la manifestación de voluntad del ciudadano, demuestre su dicho.

Esto es, **la presunción de inocencia no libera al denunciado de la carga de presentar los medios de convicción idóneos para evidenciar la verdad de sus afirmaciones** y, consecuentemente, desvirtuar la hipótesis de culpabilidad, sino que lo constriñe a demostrar que la solicitud de ingreso al partido **fue voluntaria**, debiendo acompañar, por ejemplo, la constancia de afiliación respectiva, si desea evitar alguna responsabilidad.

De esta forma, la *Sala Superior* sostuvo que si el partido denunciado **alega que la afiliación se llevó a cabo previo consentimiento del denunciante, será ineficaz cualquier alegato en el sentido de que no tiene el deber de presentar las pruebas que justifiquen su dicho, sobre la base de que no tenía obligación legal de archivar o conservar las documentales correspondientes**, pues, por

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/RARM/JD06/SLP/55/2021

una parte, las cargas probatorias son independientes de otros deberes legales que no guardan relación con el juicio o procedimiento respectivo; y por otra, **la ausencia de un deber legal de archivar o resguardar** las constancias de afiliación de militantes, no implica que de manera insuperable el partido se encuentre imposibilitado para presentar pruebas que respalden su afirmación.

Desde esta óptica, la excepción exculpatoria sostenida por el PVEM, en el sentido de que la DEPPP realizó una actualización del Sistema de Verificación del Padrón de personas afiliadas a los Partidos Políticos, llevando a cabo una migración de la información de los padrones de afiliados, teniendo como efecto que los registros cancelados antes del 11 de enero de 2021, ya no puedan ser consultados por los partidos políticos en el nuevo Sistema de Verificación del Padrón de personas afiliadas a los Partidos Políticos, lo que imposibilitó saber si los quejosos del presente procedimiento cancelados en la fecha referida estuvieron afiliados a dicho instituto y, en su caso, la fecha de cancelación, **resulta ineficaz**, en virtud de que si bien es cierto justificó tal aseveración con la documental pública consistente en copia simple del oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/2198/2021, firmado por el entonces Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos de este Instituto, Patricio Ballados Villagómez, tal medio de prueba **no es idóneo, ni pertinente** para demostrar la libre voluntad de las personas quejasas para ser afiliados al denunciado.

En efecto, aunque el partido no tuviera el mencionado deber, sí podía contar con la prueba de la afiliación de una persona, teniendo en cuenta que es un documento que respalda el cumplimiento de otros deberes legales, además de que resulta viable probar la afiliación conforme al marco convencional, constitucional y legal concerniente a la libertad de afiliación, a través de otros medios de prueba que justifiquen la participación voluntaria de una persona en la vida interna del partido con carácter de militante, como por ejemplo, documentales sobre el pago de cuotas partidistas, la participación en actos del partido, la intervención en asambleas internas o el desempeño de funciones o comisiones partidistas, entre otras.

Bajo esta lógica, este Consejo General estima que la excepción formulada por el PVEM para anular la antijuridicidad de su conducta en torno a la afiliación de Francisco Eduardo García Donato, Armando Pompa Cruz, Inés Pineda Silverio,

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/RARM/JD06/SLP/55/2021

Ruby del Carmen Holguín García, Marcos Rubén Portillo Muñoz, Noé Isael Sahagún Porras, Jacqueline Gómez Flores, Evelia Reyes Jiménez y Carolina Lara Morales, resulta inatendible, porque aun cuando la DEPPP haya realizado una actualización del Sistema de Verificación del Padrón de personas afiliadas a los Partidos Políticos, llevando a cabo una migración de la información de los padrones de afiliados, que tuvo como efecto que los registros cancelados antes del once de enero de dos mil veintiuno, ya no puedan ser consultados por los partidos políticos en el nuevo Sistema de Verificación del citado Padrón y esto, según el denunciado, haya imposibilitado saber si las citadas personas quejasas estuvieron afiliados a dicho instituto, lo cierto es que el PVEM tenía el deber de conservar la documentación correspondiente para justificar su afiliación, máxime que el aludido sistema se nutre con la información proporcionada por los partidos políticos y que el mismo denunciado señaló que si fueron sus afiliados, además de que fueron dados de baja del padrón de militantes el ocho de febrero de dos mil veintiuno, esto es, con posterioridad migración de la información realizada por la DEPPP.

Lo anterior incide directamente en el derecho de presunción de inocencia en su vertiente de **estándar probatorio**, porque obliga a la autoridad del conocimiento a justificar que los datos derivados del material probatorio que obra en el expediente son consistentes con la acusación, permitiendo integrar toda la información que se genera de manera coherente, refutando la hipótesis de inocencia que hubiere presentado la defensa.

Esto es, la presunción de inocencia **no significa que el acusado no tenga que desplegar actividad probatoria alguna**, sino que su defensa debe presentar los elementos suficientes para generar duda en la hipótesis de culpabilidad que presenta la parte acusadora. En cambio, para la autoridad, la presunción de inocencia significa que no sólo debe presentar una hipótesis de culpabilidad plausible y consistente, sino que tiene que descartar hipótesis alternativas compatibles con la inocencia del acusado.

De tal suerte que si el partido político cumple con la carga probatoria que corresponde a su afirmación en el sentido de que la afiliación cuestionada estuvo precedida del consentimiento del quejoso, es decir, si exhibe prueba suficiente sobre la legitimidad de la afiliación motivo de queja, debe considerarse que

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/RARM/JD06/SLP/55/2021

prevalece el principio de presunción de inocencia, en su vertiente de estándar probatorio.

Bajo esta óptica, resulta conveniente apuntar que en el caso particular, el denunciado **no ofreció** medio de prueba alguno para justificar la afiliación de Armando Pompa Cruz, Ruby del Carmen Holguín García, Marcos Rubén Portillo Muñoz, Noé Isael Sahagún Porras, Jacquelinne Gómez Flores, Evelia Reyes Jiménez y Carolina Lara Morales, asumiendo así las consecuencias de esa falta de prueba.

En otro orden, con el propósito de justificar la afiliación de Raúl Alicia Ramírez Méndez, Francisco Eduardo García Donato, Manuel Alejandro Acosta Márquez, María Luz Adriana Esparza Esparza, Inés Pineda Silverio, Jahaziel Antonio García Torralba, Inés Pineda Silverio, Karen Alejandra Martínez Carmona, Rosa Irene Carmona Jasso, Elvira Ávila Camargo, María Socorro Baeza Rodríguez, Alex Leonel Alfaro López, Huciel Santiz López, Consuelo Guadalupe Martínez Ballinas, Fermina Ruiz Pérez y Juana Gómez Vázquez, el PVEM ofreció el **original de la cédula** de afiliación respectiva.

Al respecto, cabe destacar que, si la autenticidad o el contenido de dicho documento es cuestionado por alguna de las personas inconformes, se debe estar a las disposiciones contenidas en la *LGIFE* y el *Reglamento de Quejas*, las cuales aluden a las reglas que deben observarse tratándose de la objeción de documentos, como parte del derecho contradictorio que les asiste a las partes, de oponerse o refutar las pruebas que ofrezcan o que se allegue la *Unidad Técnica* durante la secuela de un procedimiento ordinario sancionador.

Así, el artículo 24 del citado cuerpo normativo establece que:

- 1. Las partes podrán objetar las pruebas ofrecidas durante la sustanciación de los procedimientos administrativos sancionadores ordinario y especial, siempre y cuando se realice antes de la audiencia de desahogo.**

2. Para los efectos de lo señalado en el párrafo que antecede, las partes podrán objetar la autenticidad de la prueba o bien su alcance y valor probatorio debiendo indicar cuál es el aspecto que no se reconoce de la prueba o por qué no puede ser valorado positivamente por la autoridad, esto es, el motivo por el que a su juicio no resulta idóneo para resolver un punto de hecho.

3. Para desvirtuar la existencia o verosimilitud de los medios probatorios ofrecidos, no basta la simple objeción formal de dichas pruebas, sino que es necesario señalar las razones correctas en que se apoya la objeción y aportar elementos idóneos para acreditarlas, mismos que tenderán a invalidar la fuerza probatoria de la prueba objetada.

[Énfasis añadido]

En este sentido, de conformidad con el precepto reglamentario previamente transcrito, para destruir la eficacia probatoria de los elementos de prueba aportados al sumario, las partes *_quejoso y denunciado_* **deberán señalar con precisión los aspectos de la prueba que, a su parecer, constituyen defectos o deficiencias que le restan credibilidad; además, no basta con formular dicha objeción formal, para desvirtuar la existencia o verosimilitud de la constancia de afiliación, sino que es necesario aportar, en el momento procesal oportuno, los elementos idóneos para acreditar los extremos de su objeción.**

Al respecto, resulta aplicable al caso, la Jurisprudencia 4/2005⁴¹ de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son los siguientes:

DOCUMENTOS PRIVADOS PROVENIENTES DE LAS PARTES. LA CARGA PROBATORIA DE LA OBJECIÓN DE FIRMA CORRESPONDE A QUIEN LA PLANTEA (LEGISLACIONES DE CHIAPAS Y PUEBLA, ESTA ÚLTIMA ANTES DE LA REFORMA PUBLICADA EL 14 DE SEPTIEMBRE DE 1998). En términos de lo dispuesto por los artículos 324 del Código de Procedimientos Civiles de Chiapas y 330 del Código de Procedimientos Civiles de Puebla, los documentos privados provenientes de las partes deben ser reconocidos

⁴¹ Jurisprudencia 1a./J. 4/2005, Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Abril de 2005, Página 266.

expresa o tácitamente para que adquieran el valor probatorio que las propias legislaciones les otorgan. Ahora bien, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio reiterado de que no basta decir que se objeta un documento privado para que éste carezca de valor probatorio, sino que es necesario probar las causas o motivos en que se funde la objeción. Debido a que en las legislaciones adjetivas en cuestión no se establece ninguna regla específica sobre la carga probatoria en la hipótesis apuntada, para saber a quién corresponde dicha carga de la prueba sobre la objeción formulada, deben atenderse los hechos en que se funde la misma, aplicándose las reglas genéricas establecidas en los artículos 289 del Código de Procedimientos Civiles de Chiapas y 263 del Código de Procedimientos Civiles de Puebla, en cuanto a que a cada parte corresponde probar los hechos de sus pretensiones. Por tanto, si la objeción de un documento privado proveniente de los interesados base de sus pretensiones se funda en la circunstancia de no haber suscrito el documento el objetante, a él corresponde la carga de la prueba. Dicho de otra forma, quien invoca una situación jurídica está obligado a probar los hechos fundatorios en que aquélla descansa; por lo contrario, quien sólo quiere que las cosas se mantengan en el estado que existen en el momento en que se inicia el juicio, no tiene la carga de la prueba, pues desde el punto de vista racional y de la lógica es evidente que quien pretende innovar y cambiar una situación actual, debe soportar la carga de la prueba.

Énfasis añadido

Bajo ese contexto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación advirtió, en concordancia con los preceptos invocados en líneas que anteceden, que no basta decir que se objeta un documento privado para que éste carezca de valor probatorio, sino que debe ser necesario probar las causas o motivos en que se funde la objeción, es decir, que al objetante corresponde la carga de la prueba.

A efecto de robustecer lo anterior, se citan criterios de diversos Tribunales Colegiados de Circuito, en los que se han pronunciado en tal sentido sobre el tema:

- **DOCUMENTOS PRIVADOS. OBJECCIÓN A LOS.**⁴²

⁴² Jurisprudencia I.3Oc. J/8, Tercer Tribunal Colegiado en materia Civil del Primer Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, agosto de 1996, Página 423.

**CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/RARM/JD06/SLP/55/2021**

- *DOCUMENTOS PRIVADOS PROVENIENTES DE LAS PARTES. CONFORME AL ARTÍCULO 277 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, LA CARGA PROBATORIA DE LA OBJECCIÓN DE FIRMA CORRESPONDE A QUIEN LA PLANTEA.*⁴³
- *DOCUMENTOS PRIVADOS. PARA NEGARLES VALOR PROBATORIO, NO BASTA LA SIMPLE OBJECCIÓN, SINO QUE DEBEN SEÑALARSE LAS CAUSAS EN QUE LA FUNDE Y DEMOSTRARLAS.*⁴⁴
- *DOCUMENTOS PRIVADOS, CARGA DE LA PRUEBA EN CASO DE OBJECCIÓN A LOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO)*⁴⁵
- *DOCUMENTOS PRIVADOS. CARGA DE LA PRUEBA PARA ACREDITAR LA OBJECCIÓN RESPECTO DE LA AUTENTICIDAD DE LA FIRMA CONTENIDA EN ELLOS*⁴⁶
- *DOCUMENTOS PRIVADOS PROVENIENTES DE LAS PARTES, LA CARGA PROBATORIA DE LA OBJECCIÓN DE FIRMA CORRESPONDE A QUIEN LA PLANTEA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO)*⁴⁷

De igual forma, resulta aplicable la Jurisprudencia I.3o.C. J/11⁴⁸, dictada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuyo rubro y texto son los siguientes:

⁴³ Tesis Aislada XV.4o.12 C, Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, septiembre de 2009, Página 3128.

⁴⁴ Jurisprudencia III. 1Oc. J/17, Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, Semanario Judicial de la Federación, Número 63, marzo de 1993, Página 46.

⁴⁵ Tesis Aislada, Semanario Judicial de la Federación, Tomo XII, agosto de 1993, Página 422.

⁴⁶ Tesis XXXI.3º 8 L, Tercer Tribunal Colegiado de Vigésimo Primer Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, abril de 2002, Página 1254.

⁴⁷ Tesis II. o C, 495 C, Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, septiembre de 2005, Página 1454.

⁴⁸ Tesis I.3o. C J/11, Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, octubre de 1997, Página 615.

DOCUMENTOS PRIVADOS INSUFICIENTEMENTE OBJETADOS POR EL PROPIO FIRMANTE, VALOR PROBATORIO DE LOS. *En tratándose de documentos privados, debe hacerse la distinción entre aquellos que provienen de terceras personas y los que se atribuyen a las partes litigantes en la controversia. Respecto de los primeros, basta la objeción del instrumento privado, debidamente razonada, para que pierda su valor probatorio, quedando a cargo del oferente la carga de la prueba y apoyar su contenido aportando otros elementos de convicción, y en relación con el segundo supuesto, para tener por satisfecho lo dispuesto por el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, es menester que **la parte a quien perjudique realice en tiempo, forma y suficiencia la objeción, para que pierda su alcance probatorio dicho instrumento. De esta manera, se tiene que si en un caso la contraparte del oferente, al dársele vista con el documento exhibido, se limitó a manifestar que no lo había firmado, tal aseveración no pudo constituir la causa suficiente de objeción que demeritara el alcance de esa probanza, ya que para tal efecto resulta indispensable que existan causas motivadoras de la invalidez de la prueba y que se aportaran las pruebas idóneas para tal fin, como pudieron ser las periciales grafoscópicas, grafológicas y caligráficas; elementos que no se rindieron para acreditar la impugnación, como lo dispone el artículo 341 del código citado.***

Énfasis añadido

En igual sentido, el Primer Tribunal Colegiado en materia civil del Tercer Circuito en la Jurisprudencia III.1o.C. J/29⁴⁹, sostuvo el referido criterio en el siguiente sentido:

DOCUMENTOS PRIVADOS, PRUEBA DE LA FALSEDAD DE LA FIRMA DE LOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO). *Una interpretación armónica de los artículos 342, 343, 344, 345, 346 y 351 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Jalisco, lleva a concluir que cuando **se objeta la autenticidad de la firma de un documento privado es necesario pedir el cotejo de la misma con una señalada como indubitable; además, debe ofrecerse la prueba pericial respectiva, dado que la falsificación de la firma es un punto que sólo puede ser determinado por una persona con conocimientos especiales en la materia, es decir, por un perito grafoscopista, aun cuando exista diferencia notoria entre las firmas cuestionadas, porque tal circunstancia, por sí sola, no revela lo apócrifo de una de ellas, sino únicamente la diferencia entre ambas.***

Énfasis añadido

⁴⁹ Jurisprudencia III.1o.C. J/29, Primer Tribunal Colegiado en materia Civil del Tercer Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, febrero de 2002, Página 680.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/RARM/JD06/SLP/55/2021

En suma, para destruir la presunción de inocencia que surge en favor del denunciado **cuando aporta elementos de prueba idóneos para demostrar que la afiliación cuestionada estuvo precedida de la manifestación de voluntad del quejoso**, tal como las constancias de afiliación correspondientes, o bien, elementos que pongan de manifiesto que el quejoso realizó hechos positivos derivados de su militancia, **no basta que, de manera abstracta y genérica, el quejoso afirme que dichos medios de convicción no son veraces o auténticos.**

Lo anterior, atento a que, conforme a la normatividad que rige los procedimientos sancionadores electorales y que inexcusablemente está obligado a seguir este *Consejo General*, resulta imperativo que quien objeta un medio de prueba, señale específicamente cuál es la parte que cuestiona y al efecto aporte, o cuando menos señale, conforme a la regla general relativa a que a quien afirma le corresponde probar —vigente en los procedimientos sancionadores electorales conforme a lo establecido por la *Sala Superior*—, los elementos objetivos y ciertos que puedan conducir a destruir la eficacia probatoria de los elementos aportados por el denunciado en su defensa, pues de otra manera, el principio de presunción de inocencia deberá prevalecer apoyado en las evidencias allegadas al procedimiento por el presunto responsable.

No obstante lo anterior, a excepción de Raúl Alicia Ramírez Méndez, María Luz Adriana Esparza Esparza y Rosa Irene Carmona Jasso, **las cédulas de afiliación** ofrecidas por el denunciado **no fueron objetadas** en modo alguno por las personas quejasas en alguna de las oportunidades procesales que se les concedió, motivo por lo cual su autenticidad y contenido debe quejar incólume en cuanto a sus alcances y valor probatorio.

En efecto, Raúl Alicia Ramírez Méndez, objetó la cédula de afiliación, aduciendo, sustancialmente, lo siguiente:

“... ”

Solicito se me dé, de baja del partido ya que nunca autorice se me afiliara, sólo me pidieron mi credencial para un apoyo económico, sin embargo, nunca autorice ser militante de dicho partido”.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/RARM/JD06/SLP/55/2021

Del mismo modo, María Luz Adriana Esparza Esparza, cuestiono la cédula de afiliación, señalando, lo siguiente:

“... ”

Solicito se me de (sic) baja cuanto antes del partido Verde Ecologista de México, ya que en ningún momento autorice la información personal para que se me afiliara al partido y no reconozco en todos y cada uno de los espacios del formato de afiliación que el partido proporciona”.

Por su lado, Rosa Irene Carmona Jasso, objetó la cédula de afiliación, aduciendo, sustancialmente, lo siguiente:

“... ”

Vengo a responder a la cédula de afiliación del Partido Verde Ecologista de México, el cual niego rotundamente que la firma estampada en la misma sea propia.

Ya que jamás he dado mi firma para estar afiliada a dicho partido. Manifiesto que en alguna ocasión preste mi credencial para votar que en la cédula de afiliación aparece, misma que extravié tiempo después”.

Como puede advertirse, las citadas objeciones resultan insuficientes para anular la eficacia probatoria de las cédulas cuestionadas, porque aun cuando Raúl Alicia Ramírez Méndez, María Luz Adriana Esparza Esparza y Rosa Irene Carmona Jasso, no reconocen la firma estampada en el formato de afiliación, lo cierto es que, en términos del artículo 24 del Reglamento de quejas y Denuncias, no ofreció medio de prueba alguno para demostrar su dicho como podría ser la pericial en materia de grafoscopía y determinar con ello su apócrifidad o autenticidad, además de que no controvierten frontalmente el contenido y alcances probatorios de las documentales cuestionadas y solo afirman circunstancias genéricas, ambiguas y ajenas para dilucidar la autenticidad de las firmas cuya autoría se les atribuye.

5. Pruebas y acreditación de los hechos

A) Pruebas recabadas por la UTCE

1. **Correo electrónico** remitido desde la cuenta patricio.ballados@ine.mx, correspondiente al otrora Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos de

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/RARM/JD06/SLP/55/2021

este Instituto, enviado a la Unidad Técnica el once de febrero de dos mil veintiuno, a través del cual informó el estatus de las personas quejasas como afiliadas del *PVEM*, la fecha en que fueron integradas al padrón de militantes y aquella en que fueron dadas de baja.

2. **Acta circunstanciada de inspección** a la página electrónica del *PVEM*, practicada el ocho de diciembre de dos mil veintidós, mediante la cual se constató que actualmente las personas quejasas no se encuentran como militantes del denunciado en sus plataformas públicas.

B) Pruebas aportadas por el *PVEM*

3. **Documental privada**, consistente en el oficio PVEM-INE-170/2021, a través del cual el denunciado reconoció que sí afilió a las personas quejasas en las fechas precisadas por la DEPPP, sin embargo, actualmente se encuentran dadas de baja de su padrón de militantes.

4. **Documental privada**, consistente en los oficios PVEM-INE-184/2021 , PVEM-INE-204/2021, PVEM-INE-289/2021 , PVEM-INE-565/2021 , PVEM-INE-575/2021, PVEM-INE-132/2022 y PVEM-INE-170/2022, a través de los cuales el PVEM exhibió el original de quince cédulas de afiliación correspondientes a igual número de ciudadanas y ciudadanos inconformes, con el objeto de demostrar su legal incorporación al padrón de militantes respectivo.

5. **Documental privada** consistente en el **original de la cédula de afiliación** de Raúl Alicia Ramírez Méndez, Francisco Eduardo García Donato, Manuel Alejandro Acosta Márquez, María Luz Adriana Esparza Esparza, Jahaziel Antonio García Torralba, Inés Pineda Silverio, Karen Alejandra Martínez Carmona, Rosa Irene Carmona Jasso, Elvira Ávila Camargo, María Socorro Baeza Rodríguez, Alex Leonel Alfaro López, Huciel Santiz López, Consuelo Guadalupe Martínez Ballinas, Fermina Ruiz Pérez y Juana Gómez Vázquez, mediante las cuales pretende demostrar la lícita incorporación de dichas personas a su padrón de militantes.

6. **Documental pública** consistente en copia simple del oficio **INE/DEPPP/DE/DPPF/2198/2021**, signado por el entonces Director Ejecutivo de

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/RARM/JD06/SLP/55/2021

Prerrogativas y Partidos Políticos de este Instituto, Patricio Ballados Villagómez, mediante el cual se demuestra que la DEPPP realizó una actualización del Sistema de Verificación del Padrón de personas afiliadas a los Partidos Políticos, llevando a cabo una migración de la información de los padrones de afiliados, respecto de los registros cancelados antes del 11 de enero de 2021.

C) Valoración de los medios de prueba

De los medios de prueba referidos con anterioridad, los listados en los numerales 1 y 2 del inciso A), son pruebas documentales públicas con valor probatorio pleno, al tenor de lo dispuesto en los artículos 461, párrafo 3, inciso a), y 462, párrafos 1 y 2, de la *LGIPE*; y 22, párrafo 1, fracción I, incisos a) y b); y 27, párrafos 1 y 2, del *Reglamento de Quejas*, por haber sido expedidas por una autoridad en el ejercicio de sus funciones; no encontrarse objetadas en cuanto a su autenticidad y contenido conforme a las reglas previstas en el artículo 24 del reglamento antes citado; ni estar desvirtuadas por algún elemento agregado a los autos.

Por otro lado, las pruebas identificadas con los numerales 3, 4, 5 y 6 del inciso B), en tanto documentales privadas, únicamente harán prueba plena en cuanto a los hechos a los que se refiere cuando, al concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio, genere convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, con fundamento en lo establecido en los artículos 461, párrafo 3, inciso b), y 462, párrafos 1 y 3, de la *LGIPE*; 22, párrafo 1, fracción II; y 27, párrafo 3, del *Reglamento de Quejas*.

En este sentido, del análisis al contenido de los medios de prueba antes citados, de su relación con los hechos afirmados por las partes y la verdad conocida, este Consejo General arriba a las siguientes conclusiones:

E) Conclusiones

1. Aun cuando las personas quejasas actualmente ya no forman parte del padrón de militantes del *PVEM*, **si fueron afiliadas** al mismo, en la fecha

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/RARM/JD06/SLP/55/2021

señalada por la *DEPPP* y reconocida por el mismo denunciado, de manera que la base fáctica del procedimiento que nos ocupa quedó demostrada.

2. El *PVEM* **aportó medios de convicción para demostrar la legal afiliación** de Raúl Alicia Ramírez Méndez, Francisco Eduardo García Donato, Manuel Alejandro Acosta Márquez, María Luz Adriana Esparza Esparza, Jahaziel Antonio García Torralba, Inés Pineda Silverio, Karen Alejandra Martínez Carmona, Rosa Irene Carmona Jasso, Elvira Ávila Camargo, María Socorro Baeza Rodríguez, Alex Leonel Alfaro López, Huciel Santiz López, Consuelo Guadalupe Martínez Ballinas, Fermina Ruiz Pérez y Juana Gómez Vázquez, los cuales, a excepción de Raúl Alicia Ramírez Méndez, María Luz Adriana Esparza Esparza y Rosa Irene Carmona Jasso, no fueron objetados por las citadas personas.
3. La objeción formulada por Raúl Alicia Ramírez Méndez, María Luz Adriana Esparza Esparza y Rosa Irene Carmona Jasso a la cédula de afiliación aportada por el denunciado, resulta infundada porque no se ajustó al artículo 24 del Reglamento de Quejas, por las razones expuestas.
4. Las cédulas de afiliación de Francisco Eduardo García Donato e Inés Pineda Silverio carecen de eficacia demostrativa en tanto fueron obtenidas de manera posterior a la fecha en que fueron afiliados, esto es, contienen una fecha de afiliación posterior a la informada por la *DEPPP*
5. El *PVEM* demostró haber dado de baja de su padrón de militantes a las personas quejasas, el treinta de noviembre de dos mil veinte respecto de Manuel Alejandro Acosta Márquez y el ocho de febrero de dos mil veintiuno respecto de las y los inconformes restantes, esto es, fuera de los plazos señalados en el Acuerdo INE/CG33/2019, ya que la baja ocurrió con motivo del requerimiento formulado por la UTCE.

6. Caso concreto.

A. Afiliaciones legales (13)

Como se dijo al relatar los antecedentes del presente asunto, al dar contestación al emplazamiento, el *PVEM* afirmó que la militancia de las personas quejasas, entre ellas, **Raúl Alicia Ramírez Méndez, Manuel Alejandro Acosta Márquez, María Luz Adriana Esparza Esparza, Jahaziel Antonio García Torralba, Karen Alejandra Martínez Carmona, Rosa Irene Carmona Jasso, Elvira Ávila Camargo, María Socorro Baeza Rodríguez, Alex Leonel Alfaro López, Huciel Santiz López, Consuelo Guadalupe Martínez Ballinas, Fermina Ruiz Pérez y Juana Gómez Vázquez,** estuvo precedida de su voluntad libre e individual, cumpliendo lo establecido en la Constitución, en las normas legales derivadas de ella y en sus ordenamientos internos, sin hacer uso indebido de sus datos personales, tal como se acreditó con el original de las cédulas aportadas al sumario que acompañó en diversos escritos.

Al respecto, cabe resaltar que la Unidad Técnica, mediante autos de veintinueve de marzo de dos mil veintiuno, ocho de diciembre del año próximo pasado y diecisiete de enero de la presente anualidad dio vista a las y los citados inconformes con copia simple del original de la cédula de afiliación respectiva, concediéndole un plazo perentorio para manifestar lo que a su derecho conviniera. Dicho proveído fue notificado personalmente a las y los inconformes sin que, a excepción de Raúl Alicia Ramírez Méndez, María Luz Adriana Esparza Esparza y Rosa Irene Carmona Jasso, hayan realizado objeción alguna para demeritar el contenido y eficacia probatoria de las cédulas de afiliación referidas.

En el mismo sentido, cabe recordar que, mediante acuerdo de diecisiete de enero de dos mil veintitrés, la Unidad Técnica puso los autos a la vista de las partes, para que formularan alegatos, sin que, en estas nuevas oportunidades procesales, comparecieran a formular conclusiones tendentes a restar eficacia probatoria a las cédulas aportadas por el denunciado.

Por todo lo antes razonado, atento que el *PVEM* aportó prueba idónea y suficiente para acreditar que la afiliación de las personas referidas en este apartado fue libre

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/RARM/JD06/SLP/55/2021

y voluntaria, sin que éstas cuestionaran su autenticidad y contenido, a pesar de las oportunidades que tuvieron en distintos estadios procesales, este Consejo General estima que las afiliaciones bajo estudio se realizaron conforme con las disposiciones constitucionales, legales y estatutarias aplicables.

➤ **Afiliaciones con cédulas que contienen fechas coincidentes con las informadas por la DEPPP (9)**

Como se ha venido señalando, para demostrar la afiliación de **Jahaziel Antonio García Torralba, Rosa Irene Carmona Jasso, Elvira Ávila Camargo, María Socorro Baeza Rodríguez, Alex Leonel Alfaro López, Huciel Santiz López, Consuelo Guadalupe Martínez Ballinas, Fermina Ruiz Pérez y Juana Gómez Vázquez**, el denunciado aportó las cédulas electrónicas de afiliación respectivas, cuyo contenido demuestra fehacientemente la libre voluntad de las y los citados inconformes para militar en el PVEM, sin que, a excepción de Rosa Irene Carmona Jasso, tales formatos fueran objetados o puesta en duda su autenticidad. En efecto, de las documentales referidas se advierten los datos personales y firma de las y los inconformes, los cuales son coincidentes con la información contenida en su credencial para votar con fotografía y que demuestran su voluntad para militar en el partido denunciado, además de que la fecha en que fueron obtenidas las cédulas referidas resulta coincidente con la señalada por la DEPPP en la cual ocurrieron la afiliaciones denunciadas, tal como se advierte en el cuadro siguiente:

No.	Nombre	Fecha de Afiliación DEPPP	Fecha de afiliación PVEM	Fecha de cédula
1	Jahaziel Antonio García Torralba	05/11/2019	05/11/2019	05/11/2019
2	Rosa Irene Carmona Jasso	28/11/2019	28/11/2019	28/11/2019
3	Elvira Ávila Camargo	27/09/2019	27/09/2019	27/09/2019
4	María Socorro Baeza Rodríguez	09/11/2016	09/11/2016	09/11/2016
5	Alex Leonel Alfaro López	28/03/2019	28/03/2019	28/03/2019
6	Huciel Santiz López	15/08/2019	15/08/2019	15/08/2019
7	Consuelo Guadalupe Martínez Ballinas	04/10/2019	04/10/2019	04/10/2019
8	Fermina Ruiz Pérez	02/09/2019	02/09/2019	02/09/2019
9	Juana Gómez Vázquez	29/10/2019	29/10/2019	29/10/2019

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/RARM/JD06/SLP/55/2021

En tales circunstancias, este Consejo General estima que al haber demostrado, el PVEM, con medios de prueba idóneos y eficaces la libre voluntad de las referidas personas quejas para integrarse en sus filas, las infracciones denunciadas resultan inexistentes.

➤ **Cédulas que contienen fecha anterior a la informada por la DEPPP**
(4)

En el caso de la afiliación de Raúl Alicio Ramírez Méndez, Manuel Alejandro Acosta Márquez, María Luz Adriana Esparza Esparza y Karen Alejandra Martínez Carmona, el consentimiento para militar en el PVEM se obtuvo con anterioridad a la fecha informada por la DEPPP, esto es, la citada autoridad electoral informó que las referidas personas quejas fueron afiliadas el dieciocho de julio y quince de agosto de dos mil diecinueve y el veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete, mientras que las cédulas de afiliación aportadas por el justiciable son de fecha anterior, tal como se muestra en la tabla siguiente:

No.	Nombre	Fecha de Afiliación DEPPP	Fecha de afiliación PVEM	Fecha de cédula
1	Raúl Alicio Ramírez Méndez	18/12/2019	18/12/2019	03/10/2019
2	Manuel Alejandro Acosta Márquez	15/07/2019	15/07/2019	12/07/2019
3	María Luz Adriana Esparza Esparza	21/08/2019	21/08/2019	25/07/2019
4	Karen Alejandra Martínez Carmona	28/11/2019	28/11/2019	28/11/2017

En tales circunstancias, a juicio de esta autoridad electoral nacional quedó plenamente demostrado con medios de prueba idóneos y eficaces la libre voluntad de las citadas personas quejas para militar en el PVEM, debido a que su consentimiento fue obtenido previamente a ser incorporados al padrón de militantes respectivo, en consecuencia, las infracciones denunciadas son inexistentes.

No obstante lo anterior, resulta importante destacar que aun cuando los hechos denunciados en el presente procedimiento no actualizan una infracción a la

normatividad de la materia, debe tenerse presente que las y los ciudadanos señalados alcanzaron su pretensión, que consistía en ser dados de baja del registro del padrón de afiliados del *PVEM*, pues de lo manifestado por el propio instituto político, lo señalado por la *DEPPP* y del acta circunstanciada levantada por la *UTCE* se advierte que las y los inconformes fueron dados de baja del padrón de afiliados del partido denunciado.

B. Afiliaciones ilegales (9)

Previo al análisis detallado de las infracciones aducidas por **Francisco Eduardo García Donato, Armando Pompa Cruz, Inés Pineda Silverio, Ruby del Carmen Holguín García, Marcos Rubén Portillo Muñoz, Noé Isael Sahagún Porras, Jacquelinne Gómez Flores, Evelia Reyes Jiménez y Carolina Lara Morales**, es preciso advertir los elementos que se deben actualizar para que la autoridad electoral esté en posibilidad de imponer alguna sanción en materia electoral.

En primer lugar, se debe acreditar la existencia de alguna infracción, esto es, que objetivamente esté demostrada mediante pruebas, un hecho antijurídico electoral.

Posteriormente, verificar que este hecho sea imputable a algún sujeto de Derecho en específico; esto es, partido político, candidato o inclusive cualquier persona física o moral, es decir, la atribuibilidad de la conducta objetiva a un sujeto en particular.

De tal forma que, para la configuración de una infracción administrativa electoral, se requiere de la actualización de dos elementos esenciales, por una parte, el hecho ilícito (elemento objetivo) y por otra, su imputación o atribución directa o indirecta (elemento subjetivo), lo cual puede dar lugar a responsabilidad directa o incumplimiento al deber de cuidado.

A partir de la actualización de estos dos elementos esenciales, la autoridad electoral podrá imponer alguna sanción, para lo cual deberá valorar las circunstancias que rodearon la comisión de la conducta.

En tal sentido, por cuanto hace a la existencia del supuesto normativo, debe reiterarse, como se estableció en apartados previos, que desde hace décadas está

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/RARM/JD06/SLP/55/2021

reconocida en la legislación de este país, la libertad de la ciudadanía de afiliarse, permanecer afiliada, desafiliarse de un partido político, o bien, no pertenecer a ninguno; además del derecho que tiene la ciudadanía de que se proteja su información privada y sus datos personales, todo lo cual está previsto desde el nivel constitucional.

En el caso, si bien en el marco normativo se hace referencia a los Lineamientos para la verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos Nacionales para la conservación de su Registro, identificados con el número de Resolución INE/CG617/2012, de igual manera se transcribe la parte de disposiciones estatutarias del partido político denunciado, relacionada con el procedimiento de afiliación, lo cierto es que, por el carácter constitucional de tales derechos, la existencia de los mismos —y las obligaciones correlativas a éstos—, no está condicionada al reconocimiento por parte de los sujetos obligados, en este caso, de los partidos políticos.

En otras palabras, si la libertad de afiliación, es un derecho de las y los ciudadanos de este país desde hace varios decenios, resulta evidente que las obligaciones de los partidos políticos que deriven de esta garantía —respetar la libertad de afiliación y, de ser necesario, acreditar que la incorporación a cada instituto político— no debe estar sujeta o condicionada a que éstos establezcan en sus normas internas disposiciones encaminadas a su protección, es decir, no depende, del momento en el que los partidos políticos hayan incluido en sus normas internas la obligación de que la afiliación sea voluntaria.

Por cuanto hace al elemento subjetivo señalado líneas arriba, debe destacarse que la autoridad, para estar en aptitud de conocer la verdad de los hechos y su atribución al denunciado, debe contar con elementos suficientes que generen convicción para arribar a tal conclusión, y, de ser el caso, determinar la responsabilidad y sanción respectiva.

Para ello, esta autoridad analizará y ponderará el caudal probatorio que obra en el expediente, a partir del cual es posible arribar al descubrimiento de la verdad de manera directa, en el caso del análisis de las pruebas plenas, o bien, de manera

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/RARM/JD06/SLP/55/2021

indirecta o circunstancial, al obtener indicios incriminatorios, entendidos estos como el conocimiento de un hecho desconocido a partir de otro conocido.

En este sentido, debe decirse que, en casos como el que nos ocupa, relacionados con la presunta afiliación indebida de una persona a un partido político, corresponde a las personas quejas demostrar la existencia del hecho en que se basa su inconformidad, es decir, la existencia de la afiliación tachada de ilegal, así como el señalamiento del denunciado, es decir, el partido político que supuestamente realizó la conducta infractora.

Al respecto, conviene destacar que, si el denunciado afirma que las personas quejas consintieron en ser incorporadas al padrón de militantes respectivo, es decir, que la afiliación objetada fue voluntaria y libre, entonces **deberá demostrar, con los elementos correspondientes, que los denunciantes sí expresaron su voluntad para ser registradas como militantes del instituto político en cuestión.**

Lo anterior, es acorde al principio general del Derecho "*el que afirma está obligado a probar*", recogido en el artículo 15, párrafo 2, de la *Ley de Medios*, de aplicación supletoria al presente caso, en términos de lo dispuesto por el artículo 441, de la *LGIPE*.

En tanto que al que niega se le releva de esa carga, salvo cuando su negación envuelva la afirmación expresa de un hecho; supuesto en el que estará obligado también a demostrarlo en el procedimiento.

Así las cosas, esta autoridad electoral considera, en consonancia con lo resuelto por la Sala Superior, en el expediente SUP-RAP-107/2017, analizado previamente, que, en el caso, la carga de la prueba corresponde al partido político denunciado, pues este afirmó que la afiliación de las personas quejas a su padrón de militantes fue voluntaria y libre, y no a los citados ciudadanos y ciudadanas acreditar que no solicitaron su inclusión en dicho padrón, porque ello implicaría imponerles una carga desmedida para demostrar hechos negativos.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/RARM/JD06/SLP/55/2021

En efecto, como quedo apuntado, la carga probatoria para demostrar la licitud de las afiliaciones que nos ocupa, en principio correspondía PVEM y no a las y los inconformes, como inexactamente refiere para exculparse de la infracción que se le atribuye.

Bajo esta óptica, demostrado el hecho debatido, corresponde verificar si la causa por la cual se alega su ilicitud se encuentra acreditada, es decir, si las y los inconformes solicitaron o no ser incluidas en el padrón de militantes del partido político justiciable, para lo cual era menester autorizar el uso de sus datos personales.

En este sentido, no obstante que el *PVEM* afirmó que las afiliaciones referidas en este apartado, fueron libres y voluntarias, **no exhibió**, a excepción de Francisco Eduardo García Donato e Inés Pineda Silverio, en ninguna de las oportunidades procesales para ello, **medio de prueba alguno** para demostrar sus afirmaciones.

Desde esta óptica, resulta claro que al no cumplir con la carga de la prueba que le incumbía asumió las consecuencias de esa inactividad probatoria, es decir, no probó, pese a tener el deber procesal de hacerlo, que afilió libre y voluntariamente a las y los inconformes citados, en consecuencia, este Consejo General estima que las infracciones denunciadas quedaron plenamente acreditadas porque las afiliaciones aquí analizadas resultan **ilícitas**.

Del mismo modo en el caso de las afiliaciones de Francisco Eduardo García Donato e Inés Pineda Silverio, si bien el denunciado aportó el original de la cédula de afiliación respectiva, carece de eficacia demostrativa porque se obtuvo de manera posterior a la fecha en que los citados inconformes se incorporaron al padrón de militantes del justiciable, de manera que las infracciones alegadas son existentes.

➤ **Afiliaciones sin cédula (7)**

Como ha quedado apuntado, las afiliaciones de Armando Pompa Cruz, Ruby del Carmen Holguín García, Marcos Rubén Portillo Muñoz, Noé Isael Sahagún Porras, Jacqueline Gómez Flores, Evelia Reyes Jiménez y Carolina Lara Morales resultan ilícitas en virtud de que el denunciado **no aportó medio de prueba** alguno en el

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/RARM/JD06/SLP/55/2021

que conste su voluntad para militar en su padrón de militantes, no obstante las oportunidades que tuvo en diversas etapas procesales para tal efecto. En este sentido, resulta claro que al no cumplir con la carga de la prueba que le incumbía asumió las consecuencias de esa inactividad probatoria, es decir, no probó, pese a tener el deber procesal, que afilió libre y voluntariamente a las y los inconformes referidos.

Bajo el contexto factico y normativo expuesto resulta claro que las afiliaciones de las personas quejasas señaladas en este apartado son indebidas y actualizan las infracciones denunciadas.

➤ **Afiliaciones con cédulas que contienen fecha posterior a la informada por la DEPPP (2)**

Respecto de la afiliación de Francisco Eduardo García Donato e Inés Pineda Silverio, esta autoridad electoral nacional estima que resulta indebida y acredita plenamente las infracciones denunciadas, en virtud de que la voluntad de las y los inconformes referidos fue obtenida de manera posterior a la fecha de afiliación informada por la DEPPP y reconocida por el propio denunciado, tal como se ilustra en la gráfica siguiente:

No.	Nombre	Fecha de Afiliación DEPPP	Fecha de afiliación PVEM	Fecha de cédula
1	Francisco Eduardo García Donato	01/09/2019	01/09/2019	23/09/2019
3	Inés Pineda Silverio	26/10/2016	26/10/2016	31/10/2016

En efecto, como se advierte, la fecha de afiliación de las y los citados quejasos informada por la DEPPP, es anterior a la data contenida en la cédula de afiliación con la que el denunciado pretende justificar su lícita incorporación, por tal motivo, conforme a lo razonado en acápites anteriores, este Consejo General, estima que dichas cédulas no pueden tener eficacia demostrativa como lo pretende el justiciable, ya que los formatos bajo análisis fueron obtenidos con posterioridad a la

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/RARM/JD06/SLP/55/2021

fecha en que las y los denunciantes fueron incorporados al padrón de militantes del PVEM.

En tales condiciones, este Consejo General estima que si bien las cédulas bajo estudio contienen la firma impresa de las y los inconformes, aun cuando no hayan sido objetadas por estos, tal afiliación comenzó a surtir sus efectos a partir de la fecha en que se obtuvo el consentimiento de Francisco Eduardo García Donato e Inés Pineda Silverio, sin que sea dable otorgarle efectos retroactivos, aunado a que el denunciado los dio de baja de su padrón de militantes hasta el ocho de febrero de dos mil veintiuno, esto es fuera de los plazos establecidos en el acuerdo INE/CG33/2019.

De este modo, al no aportar medio de prueba alguno que justifique de manera eficaz la afiliación de las y los citados inconformes, este Consejo General considera existentes las infracciones denunciadas por la indebida afiliación de que fueron objeto.

En suma, como se razonó en acápites anteriores, está demostrado, a partir de la información proporcionada por la DEPPP y el mismo denunciado, que Francisco Eduardo García Donato, Armando Pompa Cruz, Inés Pineda Silverio, Ruby del Carmen Holguín García, Marcos Rubén Portillo Muñoz, Noé Isael Sahagún Porras, Jacquelinne Gómez Flores, Evelia Reyes Jiménez y Carolina Lara Morales, se encontraban incluidos en el padrón de militantes del PVEM, de ahí que los hechos consistentes en la afiliación de las citadas personas quejasas, cuya licitud se discute, han quedado plenamente demostrados.

SEXTO. CALIFICACIÓN DE LA FALTA E INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN

Una vez que ha quedado demostrada plenamente la comisión de las faltas denunciadas, así como la responsabilidad por parte del partido político, procede ahora determinar la sanción correspondiente, tomando en consideración lo dispuesto en el artículo 458, párrafo 5, de la *LGIFE*, relativo a la gravedad de la responsabilidad en que se incurra; el bien jurídico tutelado por las normas transgredidas; las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la infracción; las condiciones socioeconómicas del infractor; las condiciones externas y los medios

de ejecución de la falta; y, en su caso, la reincidencia y el monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio derivado de la infracción.

1. Calificación de la falta

A) Tipo de infracción

Tipo de infracción	Descripción de la conducta	Disposiciones jurídicas infringidas
La infracción se cometió por una acción del partido político denunciado y el grado de participación fue como autor material del hecho ilícito con pleno dominio del hecho.	La conducta cuestionada fue la afiliación indebida y el uso no autorizado de los datos personales de las personas quejas, por parte del <i>PVEM</i> .	Artículos 6, apartado A, fracción II; 16, párrafo segundo; 35, fracción III, y 41, Base I, párrafo segundo, de la Constitución; 443, párrafo 1, inciso a), de la <i>LGPE</i> ; 2, párrafo 1, inciso b) y 25, párrafo 1, incisos a), e) y y) de la <i>Ley de Partidos</i> .

B) Bien jurídico tutelado (trascendencia de las normas transgredidas).

En el presente asunto, las disposiciones vulneradas tienden a preservar el derecho de las y los ciudadanos de decidir libremente si desean o no afiliarse a un partido político, dejar de formar parte de él o no pertenecer a ninguno, el cual se erige como un derecho fundamental que tienen los individuos para tomar parte en los asuntos políticos del país.

En el caso concreto, se acreditó que el *PVEM* incluyó indebidamente en su padrón de afiliados a Francisco Eduardo García Donato, Armando Pompa Cruz, Inés Pineda Silverio, Ruby del Carmen Holguín García, Marcos Rubén Portillo Muñoz, Noé Israel Sahagún Porras, Jacqueline Gómez Flores, Evelia Reyes Jiménez y Carolina Lara Morales, sin demostrar que previamente obtuvo su consentimiento para incorporarlos, vulnerando con ello lo establecido en los artículos 35, fracción III, y 41, Base I, párrafo segundo, de la Constitución; 2, párrafo 1, inciso b), y 25, párrafo 1, incisos a) y e) de la Ley de Partidos.

A partir de esta premisa, es válido afirmar que el bien jurídico tutelado por las normas transgredidas, radica en garantizar el derecho de las y los ciudadanos mexicanos, de optar libremente por ser o no militantes de algún partido político, lo cual implica la obligación de éstos de velar por el respeto de la prerrogativa señalada, a través de mecanismos que permitan generar certeza respecto de que quienes figuran en sus respectivos padrones de militantes, efectivamente consintieron libremente en ser agremiados.

Por otra parte, como se analizó, el denunciado utilizó los datos personales de las personas quejasas como lo son, el nombre y la clave de elector, lo cual ocurrió en contra de su voluntad, de ahí que el uso de sus datos personales se constituya como un elemento indisoluble de la infracción consistente en la afiliación indebida, circunstancias que deben considerarse al momento de fijar la sanción correspondiente al *PVEM*.

C) Singularidad o pluralidad de la falta acreditada

La conducta infractora **fue singular**, pues aun cuando se acreditó que el *PVEM* transgredió lo establecido en disposiciones constitucionales y legales, incluyendo su normativa estatutaria, y que, tal infracción se cometió en detrimento de los derechos de las personas quejasas, tal circunstancia no implica *per se* un concierto o pluralidad de infracciones o de faltas administrativas, toda vez que, en el caso, únicamente se acreditó la infracción al derecho político electoral de libertad de afiliación por parte del instituto político denunciado, quien, como ya se dijo, incluyó en su padrón de militantes a las personas quejasas referidas, sin demostrar el consentimiento previo para ello.

D) Circunstancias de modo, tiempo y lugar de la infracción

Ahora bien, para llevar a cabo la individualización de la sanción de la conducta infractora debe valorarse las circunstancias objetivas que concurren en el caso, como son:

a) Modo. En el caso bajo estudio, la irregularidad atribuida al *PVEM*, consistió en incluir en su padrón de afiliados a las personas quejasas, sin haber recabado su

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/RARM/JD06/SLP/55/2021

voluntad para pertenecer a las filas del instituto político citado, inobservando lo establecido en los artículos 6, apartado A, fracción II; 16, párrafo segundo; 35, fracción III, y 41, Base I, párrafo segundo, de la *Constitución*; 443, párrafo 1, inciso a), de la *LGIPE*; 2, párrafo 1, inciso b) y 25, párrafo 1, incisos a), e) y y) de la *Ley de Partidos*.

b) Lugar y Tiempo. En el caso concreto, la afiliación controvertida sucedió en la fecha y lugar que se cita a continuación:

No	Nombre de la persona quejosa	Lugar	Tiempo
1.	Francisco Eduardo García Donato	San Luis Potosí	01/09/2019
2.	Armando Pompa Cruz	Chihuahua	15/11/2016
3.	Inés Pineda Silverio	Guerrero	26/10/2016
4.	Ruby del Carmen Holguín García	Chihuahua	03/10/2019
5.	Marcos Rubén Portillo Muñoz	Chihuahua	04/10/2019
6.	Noé Isael Sahagún Porras	Baja California	13/06/2019
7.	Jacqueline Gómez Flores,	Michoacán	19/02/2020
8.	Evelia Reyes Jiménez	Michoacán	30/06/2018
9.	Carolina Lara Morales	Guanajuato	11/02/2020

Como puede advertirse de la gráfica que antecede, en los casos de Armando Pompa Cruz e Inés Pineda Silverio, la afiliación cuestionada aconteció con anterioridad a la aprobación del acuerdo INE/CG33/2019, mientras que Francisco Eduardo García Donato, Ruby del Carmen Holguín García, Marcos Rubén Portillo Muñoz, Evelia Reyes Jiménez y Noé Isael Sahagún Porras fueron incorporados al padrón de militantes del PVEM, durante el curso de dicho acuerdo, cuya finalidad preponderante, consistía en asegurar la precisión y confiabilidad de los padrones de militantes de los partidos políticos de manera que al no contar con la documentación soporte que demostrará la voluntad de la persona afiliada, los Partidos Políticos Nacionales debían reservar dichas afiliaciones a fin de intentar conseguir el **refrendo o ratificación** por parte del militante y, de no conseguirlo en los plazos marcados, proceder a dar de baja a los militantes respecto de quienes no contaran con la manifestación de voluntad respectiva, tal como ocurrió en la especie. Circunstancia que resulta relevante para el caso que nos ocupa y será tomada en consideración al momento de seleccionar la sanción que, en su caso, resulte aplicable. Por último, respecto de Jacqueline Gómez Flores y Carolina Lara

Morales fueron afiliadas al padrón de militantes del denunciado con posterioridad a la vigencia del citado acuerdo.

E) Intencionalidad de la falta (comisión dolosa o culposa)

Este Consejo General considera que la conducta fue **dolosa**, esencialmente, por las razones que se citan enseguida:

- El *PVEM* es un partido político nacional y, por tanto, tiene el estatus constitucional de **entidad de interés público**, de conformidad con lo previsto en el artículo 41 constitucional.
- Los partidos políticos son el resultado del ejercicio de la libertad de asociación en materia política, previsto en los artículos 9, párrafo primero, 35, fracción III, y 41, párrafo segundo, fracción I, de la *Constitución*; 22 y 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como 16 y 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
- El *PVEM* está **sujeto al cumplimiento de las normas que integran el orden jurídico nacional e internacional** y está obligado a conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta a los principios del Estado democrático, respetando los derechos de las y los ciudadanos, de acuerdo con el artículo 25, párrafo 1, inciso a), de la *Ley de Partidos*.
- El derecho de libre afiliación a un partido político es un **derecho fundamental** cuyo ejercicio requiere de la manifestación personal y directa de voluntad de cada ciudadano, en términos del precitado artículo 41 constitucional.
- Los partidos políticos son un espacio para el ejercicio de derechos fundamentales en materia política-electoral, partiendo de los fines que constitucionalmente tienen asignados, especialmente como promotores de la participación del pueblo en la vida democrática y canal para el acceso de las y los ciudadanos al ejercicio del poder público, por lo que a su interior el ejercicio de tales derechos no solo no se limita, sino por el contrario, **se ensancha y amplía**.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/RARM/JD06/SLP/55/2021

- Todo partido político, tiene la **obligación de respetar la libre afiliación** y, consecuentemente, de cuidar y vigilar que sus militantes sean personas que fehacientemente otorgaron su libre voluntad para ese efecto.
- El ejercicio del derecho humano a la libre afiliación a cualquier partido político, conlleva un **deber positivo a cargo de los institutos políticos**, consistente no sólo en verificar que se cumplen los requisitos para la libre afiliación a su padrón, sino en **conservar, resguardar y proteger la documentación o pruebas en donde conste la libre afiliación** de sus militantes, en términos de lo dispuesto en los artículos 35, fracción III, 41, Base I, párrafo segundo, de la *Constitución*; 2, párrafo 1, inciso b), y 25, párrafo 1, incisos a) y e), de la *Ley de Partidos*.
- El derecho de participación democrática de la ciudadanía, a través de la libre afiliación a un partido político, supone que éste sea el receptáculo natural para la verificación de los requisitos y para la guarda y custodia de la documentación o pruebas en las que conste el libre y genuino ejercicio de ese derecho humano, de lo que se sigue que, en principio, ante una controversia sobre afiliación, **corresponde a los partidos políticos involucrados, demostrar que la afiliación atinente fue libre y voluntaria**.
- La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.
- Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y a su cancelación, así como a manifestar su oposición (para el caso de solicitudes de desafiliación), en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger derechos de terceros.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/RARM/JD06/SLP/55/2021

- La afiliación indebida o sin consentimiento a un partido político, es una violación de orden constitucional y legal que requiere o implica para su configuración, por regla general, **la utilización indebida de datos personales** de la persona o ciudadano afiliado **sin su consentimiento**.

Aunado a lo anterior, la conducta del *PVEM* resulta dolosa porque:

- Las personas quejas negaron haber consentido su registro o incorporación como militante del *PVEM*; sin que dicha afirmación fuera desvirtuada.
- Quedó acreditado que las y los denunciados se encontraban inscritos en el padrón de militantes del *PVEM*, conforme a lo informado por el denunciado y la *DEPPP*.
- El partido político denunciado no aportó medio de prueba alguno para demostrar que las afiliaciones de Armando Pompa Cruz, Ruby del Carmen Holguín García, Marcos Rubén Portillo Muñoz, Noé Isael Sahagún Porras, Jacqueline Gómez Flores, Evelia Reyes Jiménez y Carolina Lara Morales, se hubieran realizado a través de los mecanismos legales y partidarios conducentes, de manera que estuviera sustentada en la expresión libre y voluntaria de las personas denunciadas.
- Las cédulas de afiliación de Francisco Eduardo García Donato e Inés Pineda Silverio, resultaron ineficaces para demostrar su libre voluntad de ser afiliados al *PVEM* en razón de que el consentimiento se obtuvo de manera posterior a la fecha en que fueron incorporados al padrón de militantes del justiciable.
- El *PVEM* demostró haber dado de baja a las y los inconformes el ocho de febrero de dos mil veintiuno, es decir, con posterioridad a los plazos señalados en el acuerdo INE/CG33/2019.

F) Condiciones externas (contexto fáctico)

Resulta pertinente precisar que la conducta desplegada por el *PVEM* se cometió al afiliar indebidamente a las personas quejasas, sin demostrar que, previamente, consintieron ingresar en su padrón de militantes, así como proporcionar sus datos personales con ese fin.

Lo anterior, independientemente que a la fecha de la resolución que nos ocupa ya no formen parte del padrón de militantes del denunciado, pues la cuestión a dilucidar consiste en determinar si las personas denunciadas otorgaron o no su consentimiento expreso para ser afiliadas, de modo que la fecha en que hayan sido dadas de baja resulta irrelevante, pues la infracción se actualizó en el momento mismo en que el denunciado las afilió indebidamente y continuó hasta que las dio de baja.

2. Individualización de la sanción.

Una vez sentadas las anteriores consideraciones, **y a efecto de individualizar apropiadamente la sanción**, se procede a tomar en cuenta los siguientes elementos:

A) Reincidencia

Conforme al artículo 458, párrafo 6 de la LGIPE, se considerará reincidente a quien, habiendo sido declarado responsable del incumplimiento a alguna de las obligaciones a que se refiere el mencionado ordenamiento legal, incurra nuevamente en la misma conducta infractora.

En este sentido, es un hecho notorio para este órgano colegiado la existencia de diversas resoluciones emitidas por el Consejo General, sobre conductas idénticas a la que nos ocupa, destacándose para los efectos del presente apartado, la identificada con la clave INE/CG448/2018, a través de la cual, el once de mayo de dos mil dieciocho, este Consejo General resolvió el procedimiento ordinario sancionador UT/SCG/Q/MGSF/JD31/MEX/76/2017, determinó la responsabilidad del hoy denunciado al actualizarse la indebida afiliación que fue analizada en dicho

procedimiento, resolución que adquirió definitividad y firmeza, en tanto que fue confirmada mediante el SUP-RAP-137/2018.

➤ **Afiliaciones con reincidencia**

Conforme a lo expuesto, resulta claro que, en los casos de Francisco Eduardo García Donato, Ruby del Carmen Holguín García, Marcos Rubén Portillo Muñoz, Noé Isael Sahagún Porrás, Jacquelinne Gómez Flores, Evelia Reyes Jiménez y Carolina Lara Morales, la conducta que hoy se atribuye al denunciado **sí resulta reincidente**, ya que, pese haber sido sancionado por una conducta de igual naturaleza, nuevamente, nuevamente afilió de forma indebida a las y los citadas inconformes al incorporarlos a su padrón de militantes sin su voluntad, lo cual implica una transgresión a la normatividad electoral, que debía observar con mayor cuidado porque ya pesaba una resolución en su contra por hechos similares.

➤ **Afiliaciones sin reincidencia**

En los casos de Armando Pompa Cruz e Inés Pineda Silverio la indebida afiliación ocurrió el quince de noviembre y el veintiséis de octubre de dos mil dieciséis, respectivamente, esto es, con anterioridad a la fecha en que el PVEM fue sancionado por vez primera por una infracción de igual naturaleza a la que nos ocupa, por lo cual, esta autoridad electoral estima que si bien la conducta resulta ilegal no se actualiza la reincidencia.

B) Calificación de la gravedad de la infracción en que se incurra

En el presente caso, atendiendo a los elementos objetivos anteriormente precisados, la infracción debe calificarse dependiendo de las circunstancias particulares de cada caso concreto, contando con una amplia facultad discrecional para calificar la gravedad o levedad de una infracción.

En efecto, una vez acreditada la infracción, esta autoridad electoral debe determinar, en principio, si la falta fue levísima, leve o grave, y en caso del último supuesto, precisar si se trata de una gravedad ordinaria, especial o mayor.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/RARM/JD06/SLP/55/2021

Bajo este contexto, debe mencionarse que el criterio que esta autoridad ha considerado para la imposición de la calificación de la infracción, en el presente asunto, tomará en consideración los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en la acción que produjo la infracción electoral, tales como el tipo de infracción; el bien jurídico tutelado; la singularidad y pluralidad de la falta; las circunstancias de tiempo, modo y lugar; el dolo o culpa; la reiteración de infracciones; las condiciones externas y los medios de ejecución.

En este sentido, para la graduación de la falta, se deben tomar en cuenta las siguientes circunstancias:

- Quedó acreditada la infracción al derecho de libre afiliación de Francisco Eduardo García Donato, Armando Pompa Cruz, Inés Pineda Silverio, Ruby del Carmen Holguín García, Marcos Rubén Portillo Muñoz, Noé Isael Sahagún Porras, Jacqueline Gómez Flores, Evelia Reyes Jiménez y Carolina Lara Morales, al *PVEM*, pues se comprobó que éste afilió a las y los citados denunciantes sin demostrar que medió su voluntad para pertenecer a la lista de agremiados de dicho instituto político.
- El bien jurídico tutelado por las normas transgredidas estriba en garantizar el derecho de libre afiliación de las y los ciudadanos mexicanos, con la correlativa obligación de cada partido político, de velar por el debido respeto de la prerrogativa señalada, a través de los mecanismos idóneos que permitan generar certeza respecto de la voluntad de quienes deseen pertenecer agremiados a los distintos partidos políticos.
- Para materializar la indebida afiliación de las personas denunciadas, se dispuso indebidamente sus datos personales, pues los mismos eran necesarios para formar el padrón de afiliados del *PVEM*.
- No existió un beneficio por parte del denunciado, o lucro ilegalmente logrado, ni tampoco existió un monto económico involucrado en la irregularidad.
- No implicó una pluralidad de infracciones o faltas administrativas, toda vez que se configuró una sola conducta infractora.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/RARM/JD06/SLP/55/2021

- No se afectó en forma sustancial la preparación o desarrollo de algún Proceso Electoral.
- Existe reincidencia por parte del *PVEM* respecto de la afiliación de Francisco Eduardo García Donato, Ruby del Carmen Holguín García, Marcos Rubén Portillo Muñoz, Noé Israel Sahagún Porras, Jacquelinne Gómez Flores, Evelia Reyes Jiménez y Carolina Lara Morales
- El *PVEM* afilió y dio de baja de su padrón de militantes a las personas quejas con posterioridad a la vigencia del acuerdo INE/CG33/2019, es decir, fuera de los plazos acordados en dicho proveído.

Así, en atención a los elementos objetivos precisados con antelación, se considera procedente calificar la falta en que incurrió el *PVEM* como de **gravedad ordinaria**, toda vez que como se explicó en el apartado de intencionalidad, el denunciado infringió el derecho de libre afiliación de las personas quejas, lo que constituye una violación a su derecho fundamental de libre afiliación reconocido en la *Constitución*.

C) Sanción a imponer

La mecánica para la individualización de la sanción, una vez que han quedado acreditadas la falta y la imputabilidad correspondientes, consiste en imponer al infractor, por lo menos, el mínimo de la sanción y, hecho lo anterior, ponderando las circunstancias particulares del caso, determinar si es necesario aplicar una sanción de mayor entidad, con el objeto de disuadir tanto al responsable como a los demás sujetos de derecho, de realizar conductas similares, que pudieran afectar el valor protegido por la norma transgredida.

Así, el artículo 456, párrafo 1, inciso a) de la *LGPE*, prevé el catálogo de sanciones a imponer a los partidos políticos, mismas que pueden consistir en amonestación pública; multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para la Ciudad de México (ahora calculado en UMAS); reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda;

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/RARM/JD06/SLP/55/2021

interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral y, en casos de graves y reiteradas conductas violatorias a la *Constitución* y la *LGIPE*, la cancelación de su registro como partido político.

Ahora bien, es preciso no perder de vista que el artículo 458, párrafo 5, de la *LGIPE* establece que, para la individualización de las sanciones, esta autoridad electoral nacional deberá tomar en cuenta, **entre otras cuestiones**, la gravedad de la conducta; la necesidad de suprimir prácticas que afecten el bien jurídico tutelado por la norma transgredida, las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la infracción; las condiciones socioeconómicas del infractor; las condiciones externas y los medios de ejecución de la falta; la reincidencia en que, en su caso, haya incurrido el infractor; y, el monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio involucrado en la conducta, en caso que esta sea de contenido patrimonial.

Así, la interpretación gramatical, sistemática y funcional de este precepto, a la luz de lo establecido en el artículo 22 de la *Constitución*, el cual previene que toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado, con el criterio sostenido por la Sala Superior a través de la Tesis **XLVI/2002**, de rubro **DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. LE SON APLICABLES LOS PRINCIPIOS DEL IUS PUNIENDI DESARROLLADOS POR EL DERECHO PENAL**, conduce a estimar que si bien este *Consejo General* no puede soslayar el análisis de los elementos precisados en el párrafo que antecede, **éstos no son los únicos parámetros que pueden formar su convicción en torno al *quántum* de la sanción que corresponda a una infracción e infractor en particular.**

En efecto, reconociendo el derecho fundamental de acceso a una justicia completa a que se refiere el artículo 17 de la Ley Suprema, este *Consejo General*, como órgano encargado de imponer sanciones (equivalentes a la *pena* a que se refiere el artículo 22 constitucional, entendida como expresión del *ius puniendi* que asiste al estado) está compelido a ponderar, **casuísticamente, todas las circunstancias relevantes que converjan en un caso determinado**, partiendo del mínimo establecido en el artículo 458 de la *LGIPE*, que como antes quedó dicho, constituye la base insoslayable para individualizar una sanción.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/RARM/JD06/SLP/55/2021

Esto es, el *INE*, en estricto acatamiento del principio de legalidad, **está obligado** al análisis de cada uno de los elementos expresamente ordenados en la *LGIPE*, en todos los casos que sean sometidos a su conocimiento; sin embargo, la disposición señalada no puede ser interpretada de modo restrictivo, para concluir que dicho catálogo constituye un límite al discernimiento de la autoridad al momento de decidir la sanción que se debe imponer en un caso particular, pues ello conduciría a soslayar el vocablo “entre otras”, inserto en artículo 458, párrafo 5, de la *LGIPE* y la tesis antes señalada y, consecuentemente, no administrar una justicia **completa**, contrario a lo previsto por la Norma Fundamental.

Lo anterior es relevante porque, si bien es cierto la finalidad inmediata de la sanción es la de reprochar su conducta ilegal a un sujeto de derecho, para que tanto éste como los demás que pudieran cometer dicha irregularidad se abstengan de hacerlo, lo es también que la finalidad última de su imposición estriba en la prevalencia de las disposiciones que integran el ordenamiento jurídico, para que, en un escenario ideal, el estado no necesite ejercer de nueva cuenta el derecho a sancionar que le asiste, pues el bien jurídico tutelado por cada precepto que lo integra, permanecería intocado.

En ese tenor, este *Consejo General* ha estimado en diversas ocasiones que por la infracción al derecho de libertad de afiliación como el que ha quedado demostrado a cargo del PVEM, se justifica la imposición de la sanción prevista en la fracción II, del artículo 456, párrafo 1, inciso a), de la *LGIPE*, consistente en **una multa** unitaria por cuanto hace a cada ciudadana y ciudadano sobre quienes se cometió la falta acreditada.

Sin embargo, es preciso no perder de vista que, como se refirió en el Considerando denominado “Efectos del acuerdo del Consejo General *INE/CG33/2019*” tanto esta máxima autoridad electoral administrativa como los propios partidos políticos, entre ellos el PVEM, advirtieron que a la violación del derecho de libertad de afiliación que dio lugar a los precedentes a que se refiere el párrafo anterior, subyace un problema de mayor extensión, reconociendo la necesidad de iniciar un procedimiento de regularización de sus padrones de afiliación, ya que éstos se conformaban sin el respaldo de la información comprobatoria de la voluntad ciudadana.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/RARM/JD06/SLP/55/2021

Ante tales circunstancias, y de conformidad con las previsiones establecidas en el citado Acuerdo, se implementó un procedimiento extraordinario de revisión, actualización y sistematización de los padrones de militantes de los partidos políticos nacionales, para garantizar, en un breve período, que solamente aparezcan en éstos las y los ciudadanos que en realidad hayan solicitado su afiliación, y respecto de quienes, además, los institutos políticos cuenten con el soporte documental atinente a la militancia.

Lo anterior, obedece justamente a la vigencia del orden jurídico, incluso más allá de la imposición de sanciones que reprochen a los partidos políticos la violación al derecho fundamental ciudadano a decidir si desea o no militar en una fuerza política, además de fortalecer al sistema de partidos, el cual se erige indispensable para el sano desarrollo del régimen democrático de nuestro país, permitiendo que los institutos políticos cuenten con un padrón de militantes depurado, confiable y debidamente soportado, en acatamiento al principio de certeza electoral.

Por estas razones, en dicha determinación, específicamente en el punto de acuerdo TERCERO, se ordenó lo siguiente:

TERCERO. Los PPN darán de baja definitiva de manera inmediata de su padrón de militantes los nombres de aquellas personas que, antes de la aprobación de este Acuerdo, hayan presentado quejas por indebida afiliación o por renunciaciones que no hubieran tramitado. *En el caso de las quejas por los supuestos antes referidos que se lleguen a presentar con posterioridad a la aprobación de este Acuerdo, los PPN tendrán un plazo de 10 días contado a partir del día siguiente de aquel en el que la UTCE les haga de su conocimiento que se interpuso ésta, para dar de baja de forma definitiva a la persona que presente la queja.*

[Énfasis añadido]

Además, es de suma importancia destacar que el citado Acuerdo, implicó para todos los partidos políticos nacionales, aparte de la baja de las y los ciudadanos hoy quejosos de sus padrones de afiliados, una serie de cargas y obligaciones de carácter general, tendentes a depurar sus listados de militantes y, a la par, inhibir los registros de afiliaciones que no encuentren respaldo documental sobre la plena voluntad y consentimiento de cada ciudadano.

**CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/RARM/JD06/SLP/55/2021**

En sintonía con lo expuesto, en ese acuerdo se estableció que la realización de las actividades ordenadas a los partidos políticos podría tomarse en cuenta como atenuante al momento de individualizar la sanción correspondiente, de resultar acreditada la infracción en los respectivos procedimientos sancionadores y de acuerdo con la valoración y circunstancias particulares de cada expediente.

En este contexto, de conformidad con el *Informe Final sobre el procedimiento de revisión, actualización y sistematización de los padrones de afiliadas y afiliados de los Partidos Políticos Nacionales (INE/CG33/2019)*⁵⁰, mediante el cual, la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE, informó al *Consejo General* que **los siete partidos políticos, -entre ellos el PVEM- durante la vigencia del citado Acuerdo, presentaron los informes respectivos sobre el avance en el agotamiento de las etapas previstas en el acuerdo INE/CG33/2019.**

En este tenor, a partir de la información recabada por esta autoridad, concatenada con la baja de los ciudadanos quejosos de sus padrones de militantes, y de las acciones emprendidas por el denunciado en acatamiento al mencionado acuerdo, se puede concluir que el PVEM atendió el problema de fondo que subyacía al tema de afiliaciones indebidas, al depurar su padrón de militantes, garantizando con ello el derecho ciudadano de libertad de afiliación política; lo anterior, en congruencia con la razones esenciales previstas en la Tesis de Jurisprudencia **VI/2019**, emitida por el Tribunal Electoral de rubro **MEDIDAS DE REPARACIÓN INTEGRAL. LA AUTORIDAD RESOLUTORA PUEDE DICTARLAS EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR.**

Al respecto, debe mencionarse que, del análisis a los autos del presente procedimiento se advierte que el partido denunciado señaló haber dado de baja de su padrón de afiliados a las personas quejasas en el presente asunto. En igual sentido, el titular de la DEPPP informó que las y los inconforme efectivamente fueron dados de baja del padrón de afiliados del PVEM, sin que, además, hayan sido reincorporados al mismo.

⁵⁰ Consultable en la página de internet del INE, o bien en la dirección electrónica: <https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/handle/123456789/113621>

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/RARM/JD06/SLP/55/2021

De la misma forma, la Unidad Técnica, mediante la inspección al portal de internet del PVEM, realizada el veintisiete de octubre de dos mil veintiuno, corroboró que el denunciado eliminó el registro de las personas quejasas del listado de militantes que aparece en su página electrónica.

Con base en ello, esta autoridad destaca las conclusiones siguientes:

- Ante la problemática advertida por esta autoridad electoral nacional, respecto a la falta de actualización y depuración de la documentación soporte que avale las afiliaciones ciudadanas a los partidos políticos, este *Consejo General* emitió el Acuerdo **INE/CG33/2019**, por el cual instauró, de manera excepcional, un procedimiento de revisión, actualización y sistematización de los padrones de militantes de los partidos políticos nacionales, para garantizar que únicamente aparezcan en éstos, las y los ciudadanos quienes, en realidad, hayan solicitado su afiliación.
- En relación con lo anterior, el PVEM atendió el problema subyacente a las indebidas afiliaciones denunciadas, eliminando de su padrón de militantes el registro de todas y cada una de la quejosa en el presente asunto, tanto en el *Sistema de Verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos*, como de su portal de internet, así como de aquellas cargas a que se ha hecho referencia anteriormente.

Por ello, esta autoridad considera que previo a determinar la sanción que corresponde al PVEM por la comisión de la infracción que ha sido materia de estudio en la presente Resolución, es trascendente valorar también las acciones realizadas por el responsable **con posterioridad a la comisión de la infracción**, con el objeto de acatar cabalmente el mandato constitucional de administrar justicia de manera completa, inserto en el artículo 17 de la *Constitución*.

En efecto, como antes quedó dicho, al aplicar una norma jurídica abstracta a un caso concreto, el juzgador está obligado a considerar todas las circunstancias que concurren en el particular, inclusive la conducta observada por el responsable con posterioridad a la comisión del ilícito, respecto a lo cual, resulta orientadora la jurisprudencia que se cita enseguida:

**CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/RARM/JD06/SLP/55/2021**

INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA. CORRESPONDE AL ARBITRIO JUDICIAL DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL DE INSTANCIA Y, POR ENDE, EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO NO DEBE SUSTITUIRSE EN LA AUTORIDAD RESPONSABLE.⁵¹ *Acorde con el tercer párrafo del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la autoridad judicial es la encargada de imponer las penas, al ser la que valora las pruebas para acreditar el delito y la responsabilidad penal del acusado, quien mediante el ejercicio de la inmediación debe analizar los elementos descritos en los artículos 70 y 72 del Código Penal para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, que se refieren a las condiciones de realización del delito, las calidades de los sujetos activo y pasivo, la forma de intervención del sentenciado, la situación socioeconómica y cultural de éste, **su comportamiento posterior al evento delictivo**, así como las circunstancias en que se encontraba en su realización; **todas esas condiciones deben percibirse por el juzgador de instancia, al ser quien tiene contacto directo con el desarrollo del proceso penal** y no por el tribunal constitucional, el cual tiene como función salvaguardar derechos humanos y no verificar cuestiones de legalidad, en virtud de que su marco normativo para el ejercicio de sus facultades lo constituyen la Carta Magna, los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, la Ley de Amparo y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por lo que el Tribunal Colegiado de Circuito no debe sustituirse en la autoridad responsable, toda vez que no podría aplicar directamente los preceptos de la codificación penal indicada al no ser una tercera instancia, máxime que el tema del grado de culpabilidad del sentenciado y el quántum de las penas no implica que la responsable se hubiese apartado de la razón y la sana lógica, no es una infracción a la interpretación de la ley, no es una omisión de valoración de la prueba y no consiste en la apreciación errónea de los hechos.*

Del modo anterior, este *Consejo General* considera que la actitud adoptada por el PVEM, si bien no puede excluirlo de la responsabilidad en que incurrió, puesto que la infracción quedaría impune, debe ser ponderada para fines de la individualización de la sanción que le corresponda, aproximando la sanción al extremo inferior del rango de las previstas por la *LGIFE*, toda vez que el proceder del hoy denunciado redundaría en la vigencia del orden jurídico; en la protección al derecho de libre afiliación de los ciudadanos tutelada, incluso, por los propios partidos políticos — como el denunciado—; y la prevalencia del Estado de Derecho.

⁵¹ Consultable en la página <https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/paginas/DetalleGeneralV2.aspx?id=2014661&Clase=DetalleTesisBL>

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/RARM/JD06/SLP/55/2021

Lo anterior es así, ya que de conformidad con lo informado por la *DEPPP*, se advirtió que durante la vigencia del acuerdo INE/CG33/2019, el PVEM informó sobre los avances y la culminación de las tareas encomendadas mediante el citado acuerdo, lo que revela la actitud del partido de atender la problemática fundamental, con la finalidad de depurar su padrón de afiliados y salvaguardar el derecho de libertad de afiliación en materia política.

Aunado a ello, de conformidad con el *Informe Final sobre el procedimiento de revisión, actualización y sistematización de los padrones de afiliadas y afiliados de los Partidos Políticos Nacionales (INE/CG33/2019)*, aprobado por este Consejo General, el veintiuno de febrero del año en curso, específicamente, con los incisos d) y e) del apartado denominado “VIII. CONCLUSIONES GENERALES”, es posible destacar que:

1. Al treinta y uno de enero de dos mil veinte, los partidos políticos nacionales ya no contaban con registros en el estatus “en reserva”.
2. Los partidos políticos nacionales en acatamiento del Acuerdo INE/CG33/2019, instrumentaron las acciones necesarias para publicar en sus páginas de Internet, los padrones de personas afiliadas con la misma información contenida en la página del Instituto.

Lo anterior, bajo el interés de que los padrones de personas militantes se integren exclusivamente con aquellas ciudadanas y ciudadanos que así lo decidan y las personas puedan contar con fuentes de información ciertas y accesibles para conocer con toda veracidad si se encuentran afiliadas a un partido político.

En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo tercero, del artículo 21 Constitucional, que prevé que la imposición de las penas, su modificación y su duración, son propias y exclusivas de la autoridad judicial, a juicio de este órgano electoral, en el caso de la afiliación de Armando Pompa Cruz ocurrida el quince de noviembre de dos mil dieciséis, **se justifica la reducción de la sanción previamente descrita, por una de entidad menor, establecida en el artículo 456, párrafo 1, inciso a), fracción I, de la LGIPE, consistente en una amonestación pública**, pues tal medida, permitiría lograr la finalidad del acuerdo multicitado,

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/RARM/JD06/SLP/55/2021

además que con ella se incentiva a los partidos políticos a colaborar con esta autoridad en la supervisión, actualización y consolidación de un registro de su militancia partidaria, certero y confiable.

La reincidencia del PVEM respecto de la afiliación de las personas quejas restantes no incide en la amonestación pública impuesta al denunciado, ya que, como se ha advertido, el PVEM realizó las acciones necesarias para regularizar su padrón de afiliados en cumplimiento al Acuerdo INE/CG33/2019, de modo que, la sanción impuesta por este Consejo General resulta proporcional y justa.

Con base en lo expuesto en el presente apartado, y en razón de que la sanción que se impone consiste en una **amonestación pública**, resulta innecesario el análisis de las condiciones socioeconómicas del infractor e impacto en sus actividades.

➤ **Afiliaciones sin reincidencia (2)**

Ahora bien, en los casos de Armando Pompa Cruz e Inés Pineda Silverio cabe destacar que las afiliaciones de mérito sucedieron antes de que el *PVEM* fuera sancionado mediante resolución firme por haber incorporado indebidamente a su padrón de militantes, a ciudadanos que no habían otorgado su consentimiento para ello, de manera que, si bien existe la falta, el infractor no puede ser considerado reincidente.

Lo anterior, aunado al resto de las circunstancias que concurrieron a la infracción atribuida al *PVEM*, **se justifica** la imposición de la sanción prevista en el artículo 456, párrafo 1, inciso a), fracción II, de la *LGIFE*, consistente en una **MULTA**, toda vez que se considera que tal medida permitiría cumplir con la finalidad correctiva de una sanción administrativa, ya que una amonestación pública sería insuficiente e inadecuada para prevenir la comisión futura de esta infracción; mientras que las consistentes en reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución y la cancelación del registro como partido político resultarían de carácter excesivo; y la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral, no sería inaplicable en el presente asunto.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/RARM/JD06/SLP/55/2021

Ahora bien, es de explorado derecho que las autoridades al momento de imponer una sanción pecuniaria deben respetar los límites que la propia ley establece, al fijar un monto mínimo y uno máximo, dejando al arbitrio de la autoridad determinar cuál es el aplicable, y por otra parte, deberá expresar las circunstancias de hecho que justifiquen el monto determinado; valoración en la que la autoridad deberá atender tanto a la afectación que la conducta ilícita ha generado al bien jurídico tutelado en el respectivo ordenamiento, como a la capacidad económica del infractor, la reincidencia o cualquier otro elemento del que pueda inferirse la graduación de la sanción a imponer.

En suma, la acreditación de la afiliación indebida de Armando Pompa Cruz e Inés Pineda Silverio, estuvo precedida de circunstancias particulares, como lo fue su baja del padrón de militantes del denunciado fuera de los plazos convenidos en el acuerdo INE/CG33/2019.

Por ello, esta autoridad considera adecuado, en el caso concreto, imponer al *PT* una multa equivalente a **963** (novecientos sesenta y tres) Unidades de Medida y Actualización (UMA)⁵², vigentes al momento de la comisión de los hechos ilegales, **por cada una de las infracciones acreditadas**, tal como se advierte en el cuadro siguiente:

Nº	Afiliación indebida	UMA's de multa	Fecha de afiliación	Valor UMA ⁵³	Sanción por imponer
1	Armando Pompa Cruz	963	15/11/2016	\$ 73.04	\$70, 327.89
2	Inés Pineda Silverio	963	26/10/2016	\$ 73.04	\$70, 327.89
Suma de multa					\$ 140,655.78

Lo anterior, tiene sustento en la Tesis de Jurisprudencia **10/2018**, emitida por el Tribunal Electoral, de rubro **MULTAS. DEBEN FIJARSE CON BASE EN LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN VIGENTE AL MOMENTO DE LA COMISIÓN DE LA INFRACCIÓN**.⁵⁴

Debe precisarse que se considera que la multa impuesta al *PVEM* constituye una medida suficiente para disuadir la posible comisión de infracciones similares en el

⁵² En lo sucesivo **UMA**.

⁵³ <https://www.inegi.org.mx/temas/uma/>

⁵⁴ Consultable en la liga electrónica <https://www.te.gob.mx/iuse/media/compilacion/compilacion2.htm#TEXTO%2010/2018>

futuro, ya que tomando en consideración los factores objetivos y subjetivos, se concluye que la misma resulta eficaz y proporcional.

➤ **Afiliaciones con reincidencia (7)**

Con base en los lineamientos expuestos, es pertinente recordar que este Consejo General mediante resolución INE/CG448/2018, de once de mayo de dos mil dieciocho, resolvió el procedimiento ordinario sancionador UT/SCG/Q/MGSF/JD31/MEX/76/2017, donde se determinó la responsabilidad del hoy denunciado al actualizarse la indebida afiliación que fue analizada en dicho procedimiento, resolución que adquirió definitividad y firmeza, en tanto que fue confirmada mediante el SUP-RAP-137/2018.

No obstante lo anterior, con posterioridad al dictado de dicha resolución, el denunciado afilió indebidamente a Francisco Eduardo García Donato, Ruby del Carmen Holguín García, Marcos Rubén Portillo Muñoz, Noé Isael Sahagún Porras, Jacqueline Gómez Flores, Evelia Reyes Jiménez y Carolina Lara Morales, lo cual, como ya se dijo, actualiza una conducta reincidente porque al igual que en el citado procedimiento, en la causa que nos ocupa la conducta del infractor trastocó normas de igual naturaleza consistentes en la violación al derecho de libre afiliación del ciudadano.

Bajo este contexto, resulta claro que la conducta del infractor revela un mayor desprecio por la norma, porque a pesar de que ya había sido sancionado por una infracción de la misma índole, reincidió en su conducta cuando lo debido era un mayor respeto a la norma, de ahí que la infracción que nos ocupa revele una especial atención y se justifique una mayor reprochabilidad.

Bajo esta óptica, y tomando en consideración que la acreditación de la afiliación indebida del quejoso referido en este apartado estuvo precedida de circunstancias particulares, como lo fue:

- Que las afiliaciones indebidas fueron realizadas con posterioridad a la fecha en que el denunciado fue sancionado por infracciones de igual naturaleza.
- Que se concluyó la existencia del dolo

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/RARM/JD06/SLP/55/2021

- Que el partido ya sabía de su obligación de depurar sus padrones existentes y contar con la manifestación previa y documentada de su libre intención de ser militante.
- Que la conducta del infractor es reincidente porque ya había sido sancionado por una conducta de igual naturaleza

Por ello, en principio, esta autoridad considera adecuado imponer una multa de **1,284** Unidades de Medida y Actualización (mil doscientos ochenta y cuatro UMA´s) vigentes al momento de la comisión de la conducta.

Lo anterior, tiene sustento en la Tesis de Jurisprudencia 10/2018, emitida por el Tribunal Electoral, de rubro **MULTAS. DEBEN FIJARSE CON BASE EN LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN VIGENTE AL MOMENTO DE LA COMISIÓN DE LA INFRACCIÓN**⁵⁵

Cabe precisar que iguales sanciones han sido impuestas por este *Consejo General*, al emitir diversas resoluciones que han resuelto procedimientos ordinarios sancionadores por indebidas afiliaciones y, que además han sido confirmadas por la *Sala Superior*, entre ellas, la identificada con la clave INE/CG483/2021, confirmada a través del **SUP-RAP-143/2021**.

- **1,284** (mil doscientos ochenta y cuatro) Unidades de Medida y Actualización, vigente en el año de la conducta, en que se acreditó la **reincidencia**.

Sanción que también ha sido impuesta por este *Consejo General*, en los casos de reincidencia, como lo fue la identificada con las claves **INE/CG168/2021** e **INE/CG1675/2021**.

Así, a juicio de este Consejo General, por las razones hasta aquí expuestas, se considera que la multa impuesta al *PVM*, constituye una medida suficiente para disuadir la posible comisión de infracciones similares en el futuro, sobre todo como en el caso que nos ocupa, aquellas relacionadas con nuevos registros de militantes,

⁵⁵ Consultable en la liga electrónica <http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=10/2018&tpoBusqueda=S&sWord=UNIDAD,DE,MEDIDA,DE,ACTUALIZACI%C3%93N>

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/RARM/JD06/SLP/55/2021

que no cuenten con el respaldo que acredite la libre afiliación de las y los ciudadanos que figuran en el padrón de afiliados de un partido político

Lo anterior, conforme a lo que se señala a continuación:

N°	Afiliación indebida	UMA's de multa	Fecha de afiliación	Valor UMA ⁵⁶	Sanción por imponer
1	Francisco Eduardo García Donato	1,284	01/09/2019	\$84.49	\$108,485.16
2	Ruby del Carmen Holguín García	1,284	03/10/2019	\$84.49	\$108,485.16
3	Marcos Rubén Portillo Muñoz,	1,284	04/10/2019	\$84.49	\$108,485.16
4	Noé Isael Sahagún Porras	1,284	13/06/2019	\$84.49	\$108,485.16
5	Jacqueline Gómez Flores	1,284	19/02/2020	\$86.88	\$111,553.92
6	Evelia Reyes Jiménez	1,284	30/06/2018	\$80.60	\$103,490.4
7	Carolina Lara Morales	1,284	11/02/2020	\$86.88	\$111,553.92
Suma de multa					\$ 760,538.88

Debe precisarse que se considera que la multa impuesta al *PVEM* constituye una medida suficiente para disuadir la posible comisión de infracciones similares en el futuro, ya que tomando en consideración los factores objetivos y subjetivos, se concluye que la misma resulta eficaz y proporcional.

D) El monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio económico derivado de la infracción

Se estima que la infracción cometida por parte del *PVEM*, aun cuando causó un perjuicio a los objetivos buscados por el legislador, no se cuenta con elementos objetivos para cuantificar el monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio económico ocasionado con motivo de la infracción.

E) Las condiciones socioeconómicas del infractor

En el caso que nos ocupa, en relación con la violación cometida en agravio de las personas quejasas y su respectiva sanción, este Consejo General considera que

⁵⁶ Consultable en: <https://www.inegi.org.mx/temas/uma/>

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/RARM/JD06/SLP/55/2021

cumple con los fines buscados por la normativa electoral, no resulta excesiva ni pone en riesgo el cumplimiento de los fines que asigna el orden jurídico nacional a los partidos políticos, basándose en que se encuentra integrada a los autos, copia del oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/00574/2023, emitido por el Titular de la *DEPPP*, del que se advierte que al *PVEM* le corresponde para el mes de marzo de este año, por concepto de ministración mensual para actividades ordinarias y permanentes, la cantidad de \$41,413,111.14 (cuarenta y un millones cuatrocientos trece mil ciento once pesos 14/100 MN), monto neto que se obtiene de restar a la ministración mensual a que tiene derecho, para el sostenimiento de sus actividades ordinarias, el monto de las sanciones pendientes de pago que deben ser cubiertas en el mes correspondiente

Al respecto debe decirse que la sanción económica que por esta vía se impone resulta adecuada, pues el infractor está en posibilidad de pagarla sin que se afecte su operación ordinaria, además de que la sanción es proporcional a las faltas cometidas y se estima que, sin resultar excesiva ni ruinosa, puede generar un efecto inhibitorio, lo que según ha establecido la Sala Superior del Tribunal Electoral en la sentencia identificada con la clave SUP-RAP-114/2009, es precisamente la finalidad que debe perseguir una sanción.

F) Impacto en las actividades del sujeto infractor

A consideración de esta autoridad, la sanción impuesta se encuentra dentro de los parámetros mínimos y máximos que impone la ley y no constituye una afectación a las actividades ordinarias del partido político sancionado, dado que representa, por la totalidad de las personas denunciadas, el porcentaje de 2.17% de sus ministraciones correspondientes al mes de marzo de la presente anualidad.

Por consiguiente, la sanción impuesta al *PVEM* no es de carácter gravoso, si se toma en cuenta el porcentaje que representa con relación a la ministración mensual correspondiente al mes que transcurre.

De esta forma, debe señalarse que esta autoridad considera que la multa impuesta constituye una medida suficiente para disuadir la posible comisión de infracciones

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/RARM/JD06/SLP/55/2021

similares en el futuro, tomando en consideración los elementos objetivos y subjetivos de la infracción cometida por el **PVEM** (especialmente los bienes jurídicos protegidos y los efectos de la falta); su grado de responsabilidad en el actuar ilegal, y su capacidad socioeconómica.

Dada la cantidad que se impone como multa al partido antes citado, comparada con el financiamiento que recibe del *INE* para el presente mes, para cumplir con sus obligaciones ordinarias, resulta evidente que en modo alguno se afecta sustancialmente el desarrollo de las actividades del partido político sancionado.

En efecto, la sanción económica que por esta vía se impone resulta adecuada, pues el mencionado partido político—tal como quedó explicado con anterioridad— está en posibilidad de pagarla sin que ello afecte su operación ordinaria, además que la sanción es proporcional a la falta cometida y se estima que, sin resultar excesiva ni ruinoso, puede generar un efecto inhibitorio, lo cual —según lo ha establecido la Sala Superior del *Tribunal Electoral* en la sentencia del SUP-RAP-114/2009—⁵⁷ es precisamente la finalidad que debe perseguir una sanción.

De este modo, de conformidad con el artículo 458, párrafo 7, de la *LGIPE*, las cantidades objeto de las multas serán deducidas por este Instituto de las ministraciones mensuales del financiamiento público que por concepto de actividades ordinarias permanentes reciba el **PVEM**, una vez que esta resolución haya quedado firme.

SÉPTIMO. MEDIO DE IMPUGNACIÓN

A fin de garantizar el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, amparado en el artículo 17 de la *Constitución*, se precisa que la presente resolución es impugnabile a través del recurso de apelación previsto en el artículo 42, de la *Ley de Medios*, así

⁵⁷ Consultable en la liga de internet: http://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0114-2009.pdf.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/RARM/JD06/SLP/55/2021

como del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano previsto en el artículo 79, del mismo ordenamiento.⁵⁸

Por lo expuesto y fundado, se

R E S U E L V E

PRIMERO. No se acreditó la infracción consistente en la indebida afiliación y uso de datos personales para tal efecto de Raúl Alicio Ramírez Méndez, Manuel Alejandro Acosta Márquez, María Luz Adriana Esparza Esparza, Jahaziel Antonio García Torralba, Karen Alejandra Martínez Carmona, Rosa Irene Carmona Jasso, Elvira Ávila Camargo, María Socorro Baeza Rodríguez, Alex Leonel Alfaro López, Huciel Santiz López, Consuelo Guadalupe Martínez Ballinas, Fermina Ruiz Pérez y Juana Gómez Vázquez, por las razones expuestas en el Considerando **QUINTO** de esta Resolución.

SEGUNDO. Se acreditó la infracción consistente en la indebida afiliación y uso de datos personales de Francisco Eduardo García Donato, Armando Pompa Cruz, Inés Pineda Silverio, Ruby del Carmen Holguín García, Marcos Rubén Portillo Muñoz, Noé Isael Sahagún Porras, Jacquelinne Gómez Flores, Evelia Reyes Jiménez y Carolina Lara Morales, en términos de lo razonado en el Considerando **QUINTO** de esta resolución.

TERCERO. Se impone una multa al *PVEM*, en los términos del Considerando **SEXTO** de la presente resolución, por las infracciones cometidas en contra de las personas quejasas, conforme a la tabla siguiente:

⁵⁸ Lo anterior, de conformidad con la suspensión provisional decretada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con motivo de la admisión de la demanda de controversia constitucional promovida por el Instituto Nacional Electoral, en contra del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la LGIPE, LGPP, Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y que expide una nueva Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, notificada mediante oficio 2572/2023, de veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/RARM/JD06/SLP/55/2021

N°	Afiliación indebida	UMA's de multa	Fecha de afiliación	Valor UMA ⁵⁹	Sanción por imponer
1	Armando Pompa Cruz	963	15/11/2016	\$ 73.04	\$70, 327.89
2	Inés Pineda Silverio	963	26/10/2016	\$ 73.04	\$70, 327.89
Suma de multa					\$ 140,655.78

CUARTO. Se impone una multa al *PVEM*, por la reincidencia en que incurrió, en los términos del Considerando **SEXTO** de la presente resolución, por las infracciones cometidas en contra de las personas quejas, conforme a la tabla siguiente:

N°	Afiliación indebida	UMA's de multa	Fecha de afiliación	Valor UMA ⁶⁰	Sanción por imponer
1	Francisco Eduardo García Donato	1,284	01/09/2019	\$84.49	\$108,485.16
2	Ruby del Carmen Holguín García	1,284	03/10/2019	\$84.49	\$108,485.16
3	Marcos Rubén Portillo Muñoz,	1,284	04/10/2019	\$84.49	\$108,485.16
4	Noé Isael Sahagún Porras	1,284	13/06/2019	\$84.49	\$108,485.16
5	Jacqueline Gómez Flores	1,284	19/02/2020	\$86.88	\$111,553.92
6	Evelia Reyes Jiménez	1,284	30/06/2018	\$80.60	\$103, 490.4
7	Carolina Lara Morales	1,284	11/02/2020	\$86.88	\$111,553.92
Suma de multa					\$ 760, 538.88

QUINTO. En términos de lo establecido en el artículo 457, párrafo 7, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el monto de la multa impuesta al Partido Verde Ecologista de México deberá ser deducido de las siguientes ministraciones mensuales del financiamiento público que por concepto de actividades ordinarias permanentes reciba dicho instituto político, una vez que esta resolución haya quedado firme, conforme a lo dispuesto en su Considerando **SEXTO**.

SEXTO. La presente Resolución es impugnada a través del recurso de apelación previsto en el artículo 42, de la *Ley de Medios*, así como del juicio para la protección

⁵⁹ <https://www.inegi.org.mx/temas/uma/>

⁶⁰ Consultable en: <https://www.inegi.org.mx/temas/uma/>

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/RARM/JD06/SLP/55/2021

de los derechos político-electorales del ciudadano previsto en el artículo 79, del mismo ordenamiento.

SÉPTIMO. Publíquese la presente determinación en el Diario Oficial de la Federación, una vez que la misma haya causado estado, a fin de hacer efectiva la sanción impuesta al PVEM.

Notifíquese personalmente a las personas quejasas en el presente asunto, al *PVEM* por conducto de su representante ante este Consejo General de este Instituto, **en términos del artículo 68 numeral 1, incisos d), q) y w), del Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral;** y por **estrados**, a quienes les resulte de interés.

En su oportunidad, **archívese** el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido.

La presente Resolución fue aprobada en lo general en sesión extraordinaria del Consejo General celebrada el 30 de marzo de 2023, por votación unánime de las y los Consejeros Electorales, Norma Irene De La Cruz Magaña, Doctor Uuc-kib Espadas Ancona, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Maestro José Martín Fernando Faz Mora, Carla Astrid Humphrey Jordán, Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello.

Se aprobó en lo particular por lo que hace a la objeción de pruebas, en los términos del Proyecto de Resolución originalmente circulado, por ocho votos a favor de las y los Consejeros Electorales, Doctor Uuc-kib Espadas Ancona, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Carla Astrid Humphrey Jordán, Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, y tres votos en contra de la Consejera y los Consejeros

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/RARM/JD06/SLP/55/2021

Electoral, Norma Irene De La Cruz Magaña, Maestro José Martín Fernando Faz Mora y Doctor José Roberto Ruiz Saldaña.

Se aprobó en lo particular por lo que hace a la omisión de investigar dádivas, en los términos del Proyecto de Resolución originalmente circulado, por diez votos a favor de las y los Consejeros Electorales, Norma Irene De La Cruz Magaña, Doctor Uuc-kib Espadas Ancona, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Maestro José Martín Fernando Faz Mora, Carla Astrid Humphrey Jordán, Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, y un voto en contra del Consejero Electoral Doctor José Roberto Ruiz Saldaña.

Se aprobó en lo particular por lo que hace al criterio de reiteración, en los términos del Proyecto de Resolución originalmente circulado, por nueve votos a favor de las y los Consejeros Electorales, Norma Irene De La Cruz Magaña, Doctor Uuc-kib Espadas Ancona, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Carla Astrid Humphrey Jordán, Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, y dos votos en contra de los Consejeros Electorales, Maestro José Martín Fernando Faz Mora y Doctor José Roberto Ruiz Saldaña.

**EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL
CONSEJO GENERAL**

**EL SECRETARIO DEL
CONSEJO GENERAL**

**DR. LORENZO CÓRDOVA
VIANELLO**

**LIC. EDMUNDO JACOBO
MOLINA**